

FLACSO

169

ISSN: 1409-3677

Cuaderno de
Ciencias Sociales
***Territorio y hegemonía
en Costa Rica***

Abelardo Morales Gamboa
Juan José Romero Zúñiga
Autores



FLACSO
COSTA RICA

CUADERNO DE CIENCIAS SOCIALES 169

Territorio y hegemonía en Costa Rica

**Un estudio transversal del diferencial de votos en
las elecciones de febrero de 2026**

**Abelardo Morales Gamboa
Juan José Romero Zúñiga**

Autores



FLACSO
COSTA RICA

Sede Académica Costa Rica
Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso)



FLACSO
COSTA RICA

La serie de Cuadernos de Ciencias Sociales es una publicación periódica de la sede Costa Rica de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flacso. Su propósito es contribuir al debate informando sobre corrientes y temáticas de interés en las distintas disciplinas de las Ciencias Sociales. Los contenidos y opiniones reflejados en los Cuadernos son los de sus autores y no comprometen en modo alguno a Flacso ni a las instituciones patrocinadoras.

ISSN: 1409-3677

Directora de Flacso Costa Rica: Karla Salazar Sánchez
Consejo Editorial: Cathalina García y Mauricio Sandoval
Producción editorial: Juliana Morales Orozco

La distribución de esta publicación está protegida bajo la licencia
Creative Commons BY-NC-ND 4.0 Internacional
(Atribución-NoComercial-SinDerivadas)

© 2026

Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Sede Costa Rica
De Plaza del Sol, 200 metros Sur y 25 metros Este
Curridabat, San José, Costa Rica
+506 2224 8059 | www.flacso.ac.cr

Primera edición, setiembre 2026.

INDICE

Introducción al dossier

Abelardo Morales Gamboa y Juan José Romero Zúñiga 9

Antecedentes y discusión con la literatura costarricense	11
Aproximaciones conceptuales: territorialización del conflicto político	13
Delimitación del alcance temporal y del diseño analítico	16
Sobre el alcance de los resultados	16
Referencias	17

Desarrollo humano y clivaje electoral en Costa Rica: una lectura estructural de la brecha de votos entre el Partido Pueblo Soberano y el Partido Liberación Nacional en las elecciones presidenciales del 1 de febrero de 2026

Juan José Romero Zúñiga y Abelardo Morales Gamboa 20

Introducción	20
Marco analítico y conceptual	22
Aspectos generales	22
De los clivajes clásicos a los clivajes reconfigurados	23
El giro territorial: “lugares que cuentan” y “lugares que no cuentan”	24
Globalización, shocks económicos y comportamiento electoral: evidencia causal comparada	24
Nuevas fracturas: ganadores/perdedores de la globalización y el clivaje cultural	25
Educación, élites y reconfiguración del eje izquierda/derecha	26
Del “centro–periferia” a un gradiente socio-territorial continuo: cómo encaja Costa Rica	26

Marco teórico metodológico	27
Territorio, gradientes y robustez analítica en el estudio del comportamiento electoral	27
Metodología	28
Diseño del estudio y unidad de análisis	28
Variables y operacionalización	29
Estrategia analítica	29
Consideraciones sobre inferencia y alcance	31
Resultados	31
Distribución cantonal de la brecha electoral PPSO–PLN	31
Asociación entre desarrollo humano y brecha electoral	36
Linealidad de la relación y ausencia de umbrales	38
Heterogeneidad distributiva: evidencia de la regresión cuantílica	39
Control territorial y persistencia del efecto	40
Visualización conjunta: el mapa de calor IDH–brecha	40
Síntesis de los hallazgos empíricos	42
Discusión	42
El significado sustantivo de una relación fuerte y lineal	42
Desarrollo humano, territorio y la geografía del descontento	43
Linealidad, gradientes y ausencia de umbrales	44
Robustez distributiva y carácter estructural del clivaje	44
Territorio, centralidad y desarrollo humano	45
Alcances y límites interpretativos	45
Implicaciones para el estudio del sistema político costarricense	46
Cierre de la discusión	46
Conclusiones	47
Referencias	49

Crisis hegemónica y geografía electoral en Costa Rica: fragilidad territorial y reconfiguración política en 2026

Abelardo Morales Gamboa **51**

Introducción **51**

La fragilidad territorial como categoría analítica para el estudio de la reconfiguración hegemónica **56**

Crisis hegemónica y reconfiguración territorial del bloque histórico costarricense **60**

El bloque histórico desarrollista y su fundamento territorial **60**

Reestructuración económica y crisis orgánica **61**

Nuevas geografías sociales y territorialización del descontento **62**

Hacia una recomposición hegemónica fragmentada **63**

Hegemonía, territorialidad y gobernanza criminal: un marco integrado de análisis **64**

Hegemonía y territorialización del poder **64**

Nuevas geografías sociales, gobernanza criminal y órdenes híbridos **64**

Crisis hegemónica y fragmentación territorial del consenso **66**

Metodología **68**

Diseño de investigación y unidad de análisis **68**

Variable dependiente **69**

Variables independientes **70**

Índice de Desarrollo Social (IDS) 2023 **71**

Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2023 **72**

Estrategia analítica **74**

Análisis descriptivo **74**

Regresiones lineales simples **75**

Modelo múltiple **75**

Justificación del enfoque **75**

Limitaciones **76**

Resultados empíricos	76
Análisis bivariado: fragilidad territorial y diferencia electoral	76
Modelo múltiple: efectos independientes y robustez	77
Interpretación sustantiva: territorialización de la crisis hegemónica	79
Alcances y límites interpretativos	80
La fragilidad territorial y los clivajes territoriales	80
Fragilidad territorial y recomposición hegemónica	81
Discusión general y conclusiones	83
Referencias	87
Reflexiones finales	
<i>Abelardo Morales Gamboa y Juan José Romero Zúñiga</i>	89
Reseña de los autores	96

Introducción al dossier¹

Abelardo Morales Gamboa

Juan José Romero Zúñiga

Los artículos que conforman este dossier parten de una pregunta común: en qué medida la configuración territorial del voto en las elecciones de febrero de 2026 en Costa Rica puede evidenciar no solo un episodio electoral contingente, sino también procesos más profundos de estratificación socioterritorial, fragilidad acumulada y recomposición de los alineamientos políticos. Esa pregunta se aborda en dos trabajos que, desde enfoques complementarios, analizan ese problema mediante un corte transversal que relaciona patrones electorales e indicadores territoriales específicos. De esa manera se explora la hipótesis de que el territorio no opera únicamente como contexto del comportamiento electoral, sino también como dimensión constitutiva de la organización contemporánea del conflicto político. En ese sentido, el dossier propone una indagación sobre la territorialización de dicho conflicto en Costa Rica, que trasciende los estudios convencionales sobre la distribución espacial del voto. Esta hipótesis orienta tanto la complementariedad entre los dos artículos como la apuesta conceptual que articula el dossier.

El caso costarricense sugiere que dinámicas comparables también pueden observarse en contextos latinoamericanos con sistemas políticos históricamente estables.

1 Los autores reconocen el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa como apoyo complementario para la estructuración del análisis, la exploración metodológica y la revisión del estilo del manuscrito. La formulación de las preguntas de investigación, la interpretación de los resultados, la validación de los análisis y la redacción final son responsabilidad exclusiva de los mismos autores.

Lejos de responder exclusivamente a coyunturas electorales específicas, los patrones territoriales observados parecen reflejar la acumulación histórica de desigualdades en el desarrollo social, económico e institucional entre los distintos territorios cantonales del país.

De ello se comprende que la reorganización reciente del espacio político costarricense no puede comprenderse únicamente a partir de coyunturas electorales o dinámicas partidarias, sino que expresa un proceso más profundo de estratificación socioterritorial asociado a trayectorias diferenciadas de desarrollo. Desde esta perspectiva, el análisis debe centrarse en los factores estructurales que subyacen a la configuración del comportamiento político, en particular en el papel que desempeña la acumulación de desigualdades territoriales en la estructuración de los patrones espaciales del voto.

En sintonía con los planteamientos de la geografía crítica, el territorio no constituye un simple escenario donde se despliega la política, sino una construcción histórica producida por relaciones sociales, económicas y de poder que, al sedimentarse en el espacio, condicionan de manera desigual las formas de integración social y de participación política.

En respuesta a la pregunta planteada, partimos de una constatación común: el comportamiento electoral reciente, especialmente el diferencial de votos para presidente y vicepresidentes entre los partidos Pueblo Soberano (PPSO) y Liberación Nacional (PLN), no se distribuye de manera aleatoria en el espacio nacional, sino que presenta patrones territoriales consistentes asociados a cursos diferenciados de desarrollo social.

El primer artículo, con un planteamiento metodológico robusto y que se nutre del enfoque metodológico de la epidemiología en diálogo con la sociología, identifica empíricamente la existencia de un clivaje socioterritorial asociado al desarrollo humano cantonal en la competencia electoral entre ambos partidos. Por su parte, el segundo trabajo, desde la perspectiva de la fragilidad territorial, resitúa dichos patrones en configuraciones territoriales más amplias de fragilidad estructural, incorporando dimensiones adicionales vinculadas a los factores socioeconómicos y a las condiciones territoriales del desarrollo.

En este marco, el territorio aparece no solo como un escenario donde se despliegan estrategias partidarias, sino también como una estructura social que

organiza oportunidades, orienta el desarrollo y forma percepciones sobre la representación política. El estudio del comportamiento electoral desde esta perspectiva implica reconocer esas dimensiones del análisis territorial.

Antecedentes y discusión con la literatura costarricense

La evidencia empírica disponible confirma la existencia de desigualdades territoriales persistentes, lo que constituye un punto de partida sólido para el análisis de la fragilidad territorial en Costa Rica. Los informes del Programa Estado de la Nación han documentado de manera sistemática estas brechas mediante indicadores como el Índice de Desarrollo Social (IDS), que muestra una alta dispersión entre cantones del país. Mientras algunos territorios del Valle Central presentan niveles elevados de desarrollo, otros, igualmente urbanos, comparten con cantones periféricos —especialmente en zonas costeras, fronterizas y rurales— valores significativamente más bajos, lo que refleja déficits acumulados en educación, salud, seguridad y acceso a oportunidades (Programa Estado de la Nación, 2015; 2023). El análisis de patrones de desigualdad multidimensional en Costa Rica permite fundamentar nuestra hipótesis sobre la fragilidad territorial y su relación con la crisis de hegemonía.

A estas desigualdades se suma la creciente territorialización de la violencia. Sustentados en datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ, 2025), se demuestra que la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes ha aumentado en los últimos años con una distribución altamente desigual a escala cantonal. En particular, los territorios con menor desarrollo relativo tienden a concentrar niveles más altos de violencia, lo que agrava las condiciones de inseguridad y vulnerabilidad social. Estudios regionales han señalado que estas dinámicas no solo reflejan fenómenos criminales, sino también la interacción entre la violencia, la debilidad institucional y la exclusión social (Pérez-Sáinz, 2015).

En el plano político, la literatura ha documentado una creciente *territorialización del comportamiento electoral*. Alfaro Redondo (2006) identifica cambios significativos en el sistema de partidos desde las elecciones de 2006, mientras que Alfaro Redondo (2021) y Alfaro Redondo y Aguilar (2024) profundizan en la fragmentación del voto, la volatilidad electoral y sus vínculos con la desafección política. En procesos recientes, estos trabajos sugieren que territorios

con mayores rezagos sociales y fragilidad institucional tienden a mostrar mayor receptividad a discursos de ruptura con el orden político tradicional.

La bibliografía reciente amplía esta discusión. Martínez Franzoni y Sánchez-Ancochea (2013) muestran cómo el aumento de la desigualdad y los cambios en el régimen de bienestar erosionan las bases históricas del consenso político. Sojo (2010, 2014) profundiza en esta lectura desde la construcción social de la desigualdad y sus efectos sobre la legitimidad del orden político. En diálogo con ello, el volumen editado por Rovira Mas (2006) identifica procesos de desalineamiento electoral, de volatilidad y de realineamientos incompletos que anticipan transformaciones posteriores del sistema partidario.

También existen aportes relevantes sobre la relación entre el comportamiento electoral y la estructura territorial. Vargas Cullell et al. (2006) aportan marcos para vincular la cultura política, la participación y la desigualdad territorial. Desde una perspectiva complementaria, Cortés Ramos (2002), Sánchez (2003) y Cortés Ramos y León (2008) vinculan la ruptura del bipartidismo con procesos más amplios de reconfiguración del sistema político y con una crisis hegemónica. A ello se suman Raventós Vorst et al. (2012), quienes sitúan estos procesos en un marco más amplio de crisis de representación democrática.

Estudios recientes profundizan este campo. Cascante Matamoros y Camacho Sánchez (2019) reconstruyen la distribución territorial del voto a escala cantonal y evidencian trayectorias diferenciadas en el debilitamiento del bipartidismo. Por su parte, Rojas Bolaños y Treminio Sánchez (2019) identifican mecanismos de realineamiento asociados a clivajes emergentes, particularmente religiosos y morales, mientras que el volumen coordinado por Sandoval Cordero (2025) incorpora el malestar y la cultura democrática como factores explicativos de la desafección política.

No obstante, pese a estos avances, persisten vacíos relevantes: en particular, la literatura no ha integrado de forma sistemática estos aportes en un enfoque multiescalar que permita explicar los mecanismos causales que conectan los realineamientos electorales, los clivajes emergentes (económicos, territoriales, culturales o religiosos) y las características estructurales específicas a escala cantonal. Además, faltan estudios longitudinales con datos comparables

que combinen resultados electorales desagregados con indicadores socioeconómicos finos, así como análisis que capten la heterogeneidad intracantonal y las dinámicas locales de intermediación política. Este trabajo tampoco se propone llenar por completo ese vacío, sino contribuir puntualmente con un análisis transversal situado en una coyuntura electoral específica.

A partir de esa revisión, podemos sostener que la crisis de la hegemonía en Costa Rica no puede entenderse únicamente como un fenómeno político-institucional, sino como un proceso multidimensional que articula la reconfiguración territorial del poder, la erosión de los pactos normativos y la transformación de las formas de subjetividad política.

Aproximaciones conceptuales: territorialización del conflicto político

Las desigualdades territoriales persistentes muestran que el territorio no es un simple soporte de la vida social, sino que forma parte de las dimensiones en las que se producen configuraciones diferenciadas de acceso a derechos, de presencia estatal y de condiciones de bienestar. En este contexto, la fragilidad territorial expresa no solo déficits materiales, sino también la fragmentación de la gobernanza y la emergencia de arreglos normativos híbridos que reconfiguran la regulación de la vida social a nivel local.

Adicionalmente, la perspectiva teórica de este dossier se sustenta en los enfoques de la geografía crítica, que permiten comprender el territorio y el lugar como construcciones sociales e históricas que materializan las relaciones de poder, producción y experiencia de las sociedades en un momento determinado. En esta línea, Santos plantea que el espacio geográfico es el resultado de la interacción entre sistemas de objetos y sistemas de acciones, por lo que cada lugar expresa un momento del proceso histórico de lo social (Santos, 1996). Por su parte, Lefebvre sostiene que el espacio se produce socialmente mediante la articulación entre prácticas espaciales, representaciones del espacio y espacios de representación (Lefebvre, 1991). Harvey, por su parte, enfatiza el papel del capitalismo en la configuración histórica del espacio, destacando cómo las dinámicas de acumulación y la compresión espacio-tiempo transforman continuamente los territorios (Harvey, 2001).

Desde la perspectiva latinoamericana contemporánea, Haesbaert introduce el concepto de multiterritorialidad para explicar la coexistencia de múltiples formas de apropiación territorial (Haesbaert, 2011). Tobío, a su vez, subraya el carácter conflictivo y relacional del territorio, entendido como un espacio de disputa entre diversos actores sociales (Tobío, 2012). En conjunto, estos enfoques convergen en la comprensión del territorio como una construcción dinámica en la que se condensan procesos históricos, económicos, políticos y culturales que producen y resignifican continuamente los lugares.

También este enfoque dialoga con una literatura comparada cada vez más amplia sobre la territorialización del conflicto político. En diversas democracias contemporáneas, investigaciones recientes han mostrado que el comportamiento electoral se asocia cada vez más con trayectorias territoriales de desarrollo desigual, oportunidades económicas y el acceso a servicios públicos. En este marco, conceptos como la “geografía del descontento”, los “lugares que no importan” o la territorialización de la desigualdad han cobrado un lugar central en el análisis de los realineamientos políticos en múltiples contextos nacionales.

La feliz coincidencia de participar en este dossier nos ha permitido a ambos autores mantener un diálogo fructífero. Hemos contribuido a este proyecto desde nuestras propias especialidades: si bien la salud no es el objeto de este estudio, Romero Zúñiga hacen un valioso aporte desde la perspectiva metodológica de la epidemiología, en diálogo con la sociología política, mientras que Morales Gamboa desarrolla el análisis desde las ciencias sociales. La segunda coincidencia es que ambos incorporamos, en nuestras respectivas investigaciones, las categorías del análisis político, de la geografía crítica y del análisis de las estructuras sociales. Además de los resultados empíricos, nuestra colaboración nos permitió explorar las ventajas de trascender los límites disciplinarios.

Este esfuerzo nos ha permitido poner en diálogo la perspectiva de la geografía crítica con el enfoque metodológico de la epidemiología crítica latinoamericana, desarrollada especialmente por Breilh, quien hace un uso sustancial de las nuevas perspectivas geográficas y propone el enfoque de la determinación social de la salud para analizar cómo los procesos estructurales de la sociedad se expresan en patrones diferenciados de salud y enfermedad.

De este modo, el territorio puede entenderse como el ámbito en el que se materializan dichas determinaciones sociales, articulando condiciones de vida, formas de trabajo, organización social y políticas públicas que configuran perfiles epidemiológicos específicos. Esta convergencia permite comprender la vida humana como un proceso biológico y sociocultural, históricamente situado y territorialmente configurado, en el que las desigualdades sociales se inscriben en el espacio y generan distintas condiciones de bienestar, exclusión o enfermedad.

Esto nos ha permitido constatar la complementariedad entre los enfoques de las ciencias sociales y de la epidemiología desde perspectivas renovadoras. Conviene subrayar que no se trata de establecer una asociación mecánica entre la salud y el comportamiento social y político, y menos aún de asimilar las decisiones colectivas al concepto de enfermedad. Antes bien, ambos campos convergen en dos sentidos. En primer lugar, considera el bienestar humano como objeto de su actividad científica. En segundo lugar, compartir la mirada histórica y social del territorio como dimensión fundamental de los procesos sociales, incluida la salud colectiva, así como de los comportamientos sociales, entre ellos el electoral. En tercer lugar, la investigación nos ha permitido validar la importancia del análisis ecológico, en este caso aplicado a un proceso electoral, basado en unidades territoriales, que permite hacer inferencias cuyos resultados deben leerse como agregados territoriales y no como simples decisiones individuales de los votantes.

En conjunto, el trabajo recogido en este dossier sugiere que la reconfiguración contemporánea del espacio político costarricense puede entenderse como parte de un proceso más amplio de estratificación socio-territorial. En este marco, el territorio se define como una estructura social que organiza oportunidades, trayectorias de desarrollo y alineamientos electorales y configura las condiciones sociales, económicas e institucionales que moldean dicha competencia.

Comprender estas dinámicas resulta indispensable para interpretar las transformaciones recientes de la democracia costarricense y situar el análisis electoral en los procesos más amplios de cambio estructural que atraviesan la sociedad contemporánea.

Más que un ejercicio de geografía electoral descriptiva, este dossier propone una lectura territorializada del conflicto político. El interés no se agota en mapear la distribución espacial del voto, sino en examinar cómo las desigualdades territoriales acumuladas pueden operar como principio organizador de clivajes políticos y de recomposiciones del poder.

Delimitación del alcance temporal y del diseño analítico

Conviene enfatizar, además, que el análisis se centra en un corte transversal del evento electoral de febrero de 2026, examinado en relación con variables territoriales específicas —como el desarrollo humano, el desarrollo social, la competitividad cantonal y las tasas de letalidad correspondientes a años determinados—. El objetivo no es reconstruir tendencias electorales de mediano plazo, sino analizar si, en ese momento electoral particular, dichas dimensiones territoriales permiten identificar patrones estructurados de comportamiento político y de reconfiguración del espacio electoral.

Sobre el alcance de los resultados

Es importante subrayar —como se ha dicho— que se trata de un análisis ecológico basado en unidades territoriales cantonales, por lo que las inferencias formuladas corresponden exclusivamente al nivel agregado en una coyuntura electoral. Los resultados no pretenden establecer relaciones causales respecto de decisiones individuales de voto ni extrapolar comportamientos de las personas a partir de datos territoriales, evitando así la conocida falacia ecológica. El propósito es identificar patrones estructurales en la organización territorial de la competencia política, no explicar las motivaciones individuales del electorado.

Precisamente por ello, el territorio se asume aquí no como un agregado estadístico residual, sino como una unidad pertinente para observar la estructuración espacial de la contienda política.

Conviene señalar, además, que el objetivo del estudio no es evaluar la estabilidad temporal de los patrones electorales ni desarrollar un análisis longitudinal o comparativo entre ciclos electorales, sino examinar, mediante un corte transversal referido a las elecciones de febrero de 2026, si ciertas dimensiones

territoriales se asocian con configuraciones estructuradas de competencia política. La estabilidad o evolución de estos patrones a lo largo del tiempo constituye, más bien, una línea abierta para la investigación posterior. El estudio identifica una estructura en un momento electoral; no pretende, en esta etapa, establecer la permanencia histórica del patrón.

REFERENCIAS

- Alfaro, Ronald. 2006. “Elecciones nacionales de 2006 en Costa Rica y la transformación del sistema de partidos.” *Revista de Ciencia Política* 26: 125–146.
- Alfaro, Ronald, ed. 2021. *Participación y política electoral: Nuevas miradas a las elecciones 2018 en Costa Rica*. San José, C.R: Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Tribunal Supremo de Elecciones.
- Alfaro, Ronald y Ileana Aguilar, eds. 2024. *Elecciones 2022: Caída en la participación electoral y efectos en la estabilidad democrática en Costa Rica*. San José, C.R: Instituto de Formación y Estudios en Democracia, Tribunal Supremo de Elecciones.
- Breilh, Jaime. 2013. “La determinación social de la salud como herramienta de transformación hacia una nueva salud pública.” *Revista de la Facultad Nacional de Salud Pública*. Universidad Andina Simón Bolívar.
- Cascante, María José y Sharon Camacho. 2019. “El sistema de partidos en los cantones: análisis de la distribución territorial de los apoyos (1953–2016).” *Revista de Derecho Electoral* 28: 195–216.
- Cortés, Alberto. 1999. “¿Concertación en Costa Rica? Una lectura crítica del proceso de Concertación Nacional.” *Revista de Ciencias Sociales* (86–87): 95–110.
- Cortés, Alberto. 2002. “Cultura política y sistema de partidos en Costa Rica: ¿Nuevas tendencias en el 2002?” *Anuario de Estudios Centroamericanos* 28: 97–134.

- Cortés, Alberto y Andrés León. 2008. “Costa Rica: conflictividad social y distribución 1950–2000”. Reporte 5. En *Research Report, Policy Regime and Poverty Reduction, Costa Rican Case (UNRISD)*.
- Haesbaert, Rogério. 2011. *El mito de la desterritorialización: del “fin de los territorios: a la multiterritorialidad*. México: Siglo XXI Editores.
- Harvey, David. 2001. *Spaces of capital: Towards a critical geography*. Edinburgh: Edinburgh University Press.
- Lefebvre, Henry. 1991. *The production of space*. Oxford: Blackwell.
- Martínez, Juliana y Diego Sánchez-Ancochea. 2013. *Good jobs and social services: How Costa Rica achieved the elusive double incorporation*. Londres: Palgrave Macmillan.
- Organismo de Investigación Judicial. 2025. Estadísticas criminales. Base de datos. Poder Judicial de Costa Rica. <https://sitiooij.poder-judicial.go.cr/index.php/apertura/transparencia/estadisticas-policiales>
- Pérez, Juan Pablo, ed. 2015. *Exclusión social y violencias en territorios urbanos centroamericanos*. San José, C.R: FLACSO.
- Programa Estado de la Nación. 2015. *Vigésimo primer Informe Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible*. San José, C.R: CONARE.
- Programa Estado de la Nación. 2023. *Informe Estado de la Nación 2023*. San José, C.R: CONARE.
- Raventós, Ciska, Marco Fournier, Diego Fernández, y Ronald Alfaro. 2012. *Respuestas ciudadanas ante el malestar con la política: salida, voz y lealtad*. Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED–TSE) / Universidad de Costa Rica.
- Rojas, Manuel e Ilka Treminio Sánchez. 2019. *Tiempos de travesía*. San José, C.R: FLACSO.
- Rovira, Jorge, ed. 2001. *La democracia de Costa Rica ante el siglo XXI*. San José, CR: Editorial de la Universidad de Costa Rica.
- Rovira, Jorge, ed. 2006. *Desafíos políticos de la Costa Rica actual*. San José, CR: Editorial de la Universidad de Costa Rica.

- Sánchez, Fernández. 2003. “Cambio en la dinámica electoral en Costa Rica: un caso de desalineamiento.” *América Latina Hoy* 35: 115–146.
- Sandoval, Mauricio, Cathalina García y Mariela Castro, comps. 2025. *El mal-estar en Costa Rica: ¿Alertas desde la cultura democrática?* San José: Instituto de Formación y Estudios en Democracia (IFED–TSE).
- Santos, Milton. 1996. *La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción*. Barcelona: Ariel.
- Sojo, Carlos. 2010. *Igualitarios*. La construcción social de la desigualdad en Costa Rica. San José, C.R: FLACSO.
- Sojo, Carlos. 2014. “De la ilusión a la incertidumbre: desigualdad en Costa Rica.” *Revista de Ciencias Sociales* 143: 13–28.
- Tobío, Omar. 2012. *Territorios de la incertidumbre. Apuntes para una geografía social*. Buenos Aires: Universidad Nacional de San Martín.
- Vargas-Cullell, Jorge, Luis Rosero-Bixby y Mitchell Seligson. 2006. *Cultura política de la democracia en Costa Rica, 2006*. Nashville: LAPOP.

DESARROLLO HUMANO Y CLIVAJE ELECTORAL EN COSTA RICA: UNA LECTURA ESTRUCTURAL DE LA BRECHA DE VOTOS ENTRE EL PARTIDO PUEBLO SOBERANO Y EL PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL EN LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DEL 1 DE FEBRERO DE 2026.

Juan José Romero Zúñiga y Abelardo Morales Gamboa

Introducción

El presente artículo analiza la relación entre el nivel de desarrollo humano y la brecha electoral observada entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN), utilizando información cantonal del Índice de Desarrollo Humano (IDH) 2022 y de los resultados de las elecciones presidenciales en Costa Rica del 1 de febrero de 2026.

A partir de un enfoque cuantitativo multiescalar, se demuestra la existencia de una relación negativa, fuerte y linealmente notable entre el desarrollo humano territorial y la magnitud de la brecha de votos a favor de PPSO frente al PLN. El análisis combina estadística descriptiva, modelos lineales y no lineales, regresión cuantílica y controles territoriales estrictos, y muestra que el IDH actúa como un eje estructurante del comportamiento electoral tanto a nivel nacional como a escala local.

Los resultados sugieren la presencia de un clivaje socioterritorial profundo que trasciende las explicaciones coyunturales o meramente geográficas. Las

transformaciones del sistema político costarricense de las últimas dos décadas han sido interpretadas con frecuencia a partir de categorías episódicas: liderazgos emergentes, desgaste de los partidos tradicionales, estrategias de campaña o coyunturas económicas críticas. Sin embargo, estas lecturas a veces tienden a subestimar el peso de los factores estructurales que inciden de manera persistente en las preferencias electorales en el territorio.

Los resultados de las elecciones presidenciales de 2026 ofrecen un escenario propicio para analizar estos factores. Dichos resultados pueden leerse como un acontecimiento que, aunque coyuntural, está anclado en dinámicas estructurales. En efecto, el contraste electoral entre el PPSO y el PLN ofrece una oportunidad analítica privilegiada para explorar si dicho enfrentamiento responde únicamente a dinámicas políticas contingentes o, por el contrario, expresa un clivaje social más profundo, asociado a las condiciones de vida y al desarrollo humano de los territorios.

Este trabajo parte de una pregunta central: ¿Existe una relación sistemática entre el nivel de desarrollo humano cantonal y la brecha electoral entre el PPSO y el PLN? Y, de ser así, ¿se trata de una relación circunstancial, mediada por la geografía política, o de un patrón estructural que se mantiene incluso al controlar por región y provincia?

Durante las últimas dos décadas, el sistema político costarricense ha experimentado un proceso de transformación gradual, caracterizado por el debilitamiento del bipartidismo histórico, la fragmentación del sistema de partidos y una creciente volatilidad electoral. Desde el quiebre del predominio del Partido Liberación Nacional y del Partido Unidad Social Cristiana a comienzos del siglo XXI, el panorama político se ha vuelto más inestable y menos predecible; ello se evidencia en la emergencia de nuevas fuerzas políticas, algunas efímeras, y en la aparición de liderazgos que desafían las estructuras partidarias anteriores y las normas políticas convencionales. Este proceso ha sido interpretado con frecuencia como una crisis de representación, un desgaste institucional o cambios en las preferencias del electorado.

Sin embargo, en paralelo a lo que ocurre en el ámbito político-institucional, también se ha profundizado la diferenciación territorial en las trayectorias de desarrollo social y económico del país. En ese contexto, el presente traba-

jo adquiere particular relevancia al mostrar la competencia electoral entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN) en 2026, así como su distribución territorial, en especial en relación con los niveles de desarrollo humano cantonal. El análisis sugiere que la reorganización del espacio político costarricense puede entenderse, al menos en parte, como la expresión electoral de un clivaje socioterritorial más profundo, vinculado a desigualdades persistentes en las condiciones de vida y en las oportunidades de desarrollo entre los distintos territorios del país.

Marco analítico y conceptual

Aspectos generales

El concepto de clivaje remite, en la tradición de la sociología política, a divisiones sociales profundas y relativamente estables en el tiempo que se traducen en alineamientos políticos persistentes. A diferencia de las polarizaciones temporales, los clivajes se expresan territorialmente como coyunturas que atraviesan múltiples elecciones y suelen estar vinculados a desigualdades estructurales.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), al integrar dimensiones de salud, educación e ingreso, constituye un proxy sintético de las trayectorias estructurales de los territorios. Su utilización en análisis electorales no pretende establecer una causalidad directa entre el desarrollo y el voto individual, sino evaluar si los ecosistemas sociales territoriales asociados a distintos niveles de desarrollo generan patrones políticos diferenciados.

Desde esta perspectiva, la hipótesis que orienta el estudio es que el enfrentamiento PPSO–PLN no se distribuye aleatoriamente en el territorio, sino que se organiza a lo largo de un gradiente continuo de desarrollo humano, lo que produce diferencias sistemáticas en la magnitud y la dirección de la brecha electoral.

Esta perspectiva dialoga con la propuesta analítica de Morales Gamboa, recogida en el segundo artículo de este mismo dossier, que también analiza esos resultados electorales a partir de la relación entre la fragilidad territorial y la crisis hegemónica en Costa Rica. De esa forma, el gradiente de desarrollo humano observado también puede interpretarse como una expresión empírica de

configuraciones territoriales de fragilidad estructural, en las que la acumulación de desigualdades sociales, institucionales y productivas genera contextos diferenciados de competencia política.

De los clivajes clásicos a los clivajes reconfigurados

La idea de que la competencia política se organiza en torno a clivajes sociales tiene un punto de partida clásico en la tradición de Lipset y Rokkan (1967): los sistemas de partidos tenderían a cristalizar conflictos estructurales—religión, centro-periferia, campo-ciudad, capital-trabajo—que, una vez institucionalizados, generan alineamientos relativamente estables entre grupos sociales y opciones partidarias. En esa lectura, el voto no es un agregado aleatorio de decisiones individuales, sino una expresión de la “geografía social” en la que la estructura y el territorio se articulan a través de organizaciones políticas, identidades colectivas e instituciones.

Según las contribuciones de la geografía crítica en diálogo con la economía política, los procesos sociales derivados de la globalización económica y cultural, los giros en la vida social y, entre ellos, los procesos políticos pueden alterar sus vínculos a escala geográfica, configurando nuevas territorialidades.

En las últimas décadas se ha puesto en tensión la idea de “congelamiento” de los sistemas de partidos. La comparación con otros escenarios en el mundo muestra que, incluso donde existían clivajes históricamente consolidados, la reorganización de las economías, los mercados laborales, las estructuras educativas, incluso, los mercados de consumo, ha reconfigurado quién se siente representado y por quién. En particular, el desplazamiento hacia las economías de servicios y economías digitales, la expansión educativa y la transformación de los vínculos sociales, gremiales o comunitarios, han debilitado algunos alineamientos tradicionales y han abierto espacio para nuevas oposiciones que no se explican solo por el ingreso o la clase, sino por combinaciones complejas de educación, inserción territorial y trayectorias de desarrollo.

En contextos en los que las trayectorias territoriales de desarrollo divergen de manera persistente, estos gradientes pueden reflejar tensiones más amplias en la estructura del modelo de desarrollo y en las coaliciones sociopolíticas que históricamente lo han sostenido.

A partir de esa lectura, la brecha electoral PPSO–PLN, ordenada casi linealmente por el IDH, puede entenderse como evidencia empírica de un clivaje que ya no es únicamente “partidario”, sino también socioterritorial y estructural, con resonancias muy claras en la literatura comparada reciente.

El giro territorial: “lugares que cuentan” y “lugares que no cuentan”

Uno de los aportes más influyentes en la comparación internacional es el giro hacia la dimensión territorial de la desigualdad política. Rodríguez-Pose formula la noción de “la revancha de los lugares que no importan”, argumentando que el malestar político no se distribuye únicamente entre grupos sociales, sino también entre territorios que acumulan rezagos, pérdidas de oportunidades o estancamiento relativo. Desde ese enfoque, las reacciones políticas —incluido el apoyo a opciones anti-establishment o disruptivas— pueden emerger con fuerza allí donde se percibe abandono o desconexión respecto a los centros de poder, de inversión y de servicios.

Este argumento se amplía con el trabajo de Dijkstra, Poelman y Rodríguez-Pose (2020) sobre la “geografía del descontento” en Europa: el descontento y el apoyo a fuerzas contestatarias se concentran a nivel territorial y su patrón se asocia con trayectorias regionales diferenciadas (crecimiento, oportunidades, composición del empleo, demografía). Lo novedoso de esta literatura es que trasciende los “cortes” binarios (centro vs. periferia) y propone una lógica de gradientes y trayectorias que puede observarse empíricamente, como proponemos en este texto, mediante asociaciones sistemáticas entre indicadores de desarrollo y resultados electorales.

El Índice de Desarrollo Humano (IDH), al sintetizar educación, salud e ingresos, puede interpretarse —con la prudencia debida— como análogo a esas “trayectorias de lugar”: no es un mero marcador descriptivo, sino un indicador del tipo de ecosistema social que organiza expectativas, oportunidades, el acceso a servicios y la relación con el Estado.

Globalización, shocks económicos y comportamiento electoral: evidencia causal comparada

Un segundo bloque de literatura comparada muestra que las perturbaciones económicas y las reestructuraciones productivas pueden traducirse en cambios

electorales localizados territorialmente. Se han documentado consecuencias electorales y de polarización asociadas a shocks económicos concentrados a nivel regional (Dorn, Hanson y Majlesi, 2020). En contextos distintos, se puede extraer una lección metodológica y teórica: los efectos políticos pueden ser profundamente espaciales, al igual que los impactos económicos y sociales.

La aparente causalidad directa entre el IDH y el voto —como se verá más adelante— hace razonable sostener que las condiciones estructurales territoriales, acumuladas a lo largo del tiempo, generan distribuciones sistemáticas de preferencias políticas. En otras palabras, los territorios funcionan como “contenedores” de la historia social y económica, y sus indicadores agregados capturan parte de esa trayectoria.

Nuevas fracturas: ganadores/perdedores de la globalización y el clivaje cultural

Otra perspectiva comparada influyente sostiene que la reestructuración contemporánea de la política responde a un clivaje entre “ganadores” y “perdedores” de la globalización. Kriesi y colaboradores proponen que la integración económica, la transformación tecnológica y los cambios socio-culturales reordenan las preferencias y vuelven más saliente una división entre quienes se benefician de la apertura (más educación, movilidad, inserción en sectores dinámicos) y quienes experimentan vulnerabilidad o una amenaza percibida (inseguridad económica, menor movilidad, identidades locales más arraigadas).

Este marco ofrece un puente directo con el IDH: niveles más altos tienden a correlacionar con condiciones que facilitan la adaptación a la apertura; niveles más bajos, con mayores costos relativos y un menor margen de maniobra.

Norris e Inglehart (2019) desarrollan la tesis del “cultural backlash”, según la cual la emergencia y el fortalecimiento de opciones de corte autoritario o populista se vinculan con reacciones culturales ante cambios en valores, demografía y normas sociales, aunque siempre en interacción con condiciones materiales y ansiedades económicas. En la interpretación de los conflictos contemporáneos, la reflexión teórica combina economía, cultura y territorio y, por tanto, es esperable observar patrones en los que los indicadores de desa-

rollo y modernización (como el IDH) se relacionen de forma sistemática con alineamientos políticos.

Educación, élites y reconfiguración del eje izquierda/derecha

Un aporte reciente de gran calado en la comparación de democracias occidentales es la tesis de la reorganización del conflicto político en torno a la educación y el ingreso, formulada por Piketty (2018) y posteriormente desarrollada por Gethin et al. (2020). Su argumento central es que, en muchos países, el clivaje “clase-trabajo vs. capital” se transforma: aparecen patrones en los que sectores con alta educación pueden alinearse con proyectos “progresistas”, mientras que los sectores con mayor riqueza se alinean con opciones de derecha económica. Así se generan configuraciones como “Brahmin Left” y “Merchant Right”.

Más allá del debate sobre etiquetas, lo relevante es lo metodológico: el comportamiento electoral puede ordenarse según variables estructurales (educación, ingreso, territorio) y generar asociaciones fuertes y persistentes.

Es posible que el IDH actúe como un índice que encapsule parcialmente ese componente educativo y socioeconómico a nivel territorial. En este estudio, una relación casi lineal entre el IDH y la brecha de votos es coherente con un escenario en el que la competencia partidaria se superpone a un gradiente de capital humano, de acceso a oportunidades y de densidad institucional.

Del “centro-periferia” a un gradiente socio-territorial continuo: cómo encaja Costa Rica

Con estos enfoques se puede formular una lectura teórica más fina: Costa Rica no es un país dividido en dos mitades geográficas, sino un país cuyo conflicto electoral se organiza a lo largo de un gradiente socioterritorial.

En Europa, Estados Unidos y el Reino Unido, la literatura describe patrones en los que indicadores de desarrollo, oportunidades y trayectoria territorial se asocian con apoyos más intensos a opciones anti-establishment o populistas en áreas rezagadas o percibidas como abandonadas.

Marco teórico metodológico

Territorio, gradientes y robustez analítica en el estudio del comportamiento electoral

El análisis empírico del comportamiento electoral territorial enfrenta un desafío metodológico recurrente: distinguir entre asociaciones superficiales, derivadas de agregaciones espaciales amplias, y patrones estructurales, capaces de sostenerse frente a especificaciones alternativas, escalas distintas y controles espaciales exigentes.

En el estudio de clivajes socioterritoriales, este desafío se vuelve aún más agudo, dado que las variables de interés—desarrollo, desigualdad, educación, integración económica—suelen estar altamente correlacionadas con la geografía política.

La literatura comparada reciente ha respondido a este reto mediante un enfoque metodológico que privilegia la consistencia transversal del patrón por encima de la sofisticación técnica aislada. En este marco, la fortaleza de un resultado no descansa en un único modelo “óptimo”, sino en la convergencia de la evidencia generada por distintas herramientas analíticas, cada una con sus propios supuestos y sensibilidades.

Esta aproximación —a veces denominada “*robustness-first approach*”— ha sido ampliamente utilizada en estudios sobre polarización territorial, geografía del descontento y realineamientos electorales, precisamente porque permite separar las señales estructurales de los artefactos estadísticos.

Desde esta perspectiva, el objetivo metodológico central del presente estudio no es maximizar la capacidad predictiva de un modelo específico, sino evaluar si la relación entre desarrollo humano y brecha electoral se mantiene bajo múltiples lentes analíticos: promedio y distribución, linealidad y no linealidad, comparación interregional e intrarregional. Solo si la relación persiste a través de estos filtros puede interpretarse razonablemente como una expresión de un clivaje socioterritorial subyacente.

Un segundo principio metodológico que orienta este trabajo es el rechazo explícito de enfoques dicotómicos cuando el fenómeno empírico sugiere con-

tinuidad. Buena parte del análisis territorial, como es el caso de la geografía electoral, se apoya en oposiciones binarias —urbano/rural, centro/periferia, GAM/resto del país— que, si bien son intuitivas, tienden a simplificar en exceso procesos que se manifiestan de forma gradual.

La evidencia comparada muestra que muchos clivajes contemporáneos no operan como cortes abruptos, sino como gradientes, en los que cambios incrementales en las condiciones estructurales producen desplazamientos igualmente incrementales en el comportamiento político. Metodológicamente, esto exige trabajar con variables continuas y técnicas capaces de capturar pendientes, no solo diferencias entre medias.

Finalmente, el marco metodológico de este estudio asume una distinción clave entre la causalidad individual y la estructuración territorial. El análisis no pretende inferir por qué una persona vota por un partido u otro, sino cómo los territorios —entendidos, según el enfoque de Santos, como configuraciones históricas de condiciones sociales, económicas e institucionales— organizan, de manera agregada, la competencia política. En consecuencia, las inferencias se formulan deliberadamente a nivel territorial, evitando interpretaciones psicologizantes o deterministas del voto individual.

Metodología

Diseño del estudio y unidad de análisis

El estudio adopta un diseño observacional, transversal y ecológico, con el cantón como unidad de análisis. Esta elección responde tanto a criterios sustantivos como a criterios prácticos. Desde el punto de vista analítico, el cantón constituye una escala territorial relevante para la provisión de servicios públicos, la organización administrativa y la identidad política local. Desde el punto de vista empírico, es la unidad mínima para la cual se dispone de información sistemática y comparable tanto en materia electoral como en materia de desarrollo humano.

El análisis incluye la totalidad de los 84 cantones de Costa Rica, lo que elimina problemas de muestreo y permite interpretar los resultados como descrip-

ciones exhaustivas del sistema territorial, más que como estimaciones probabilísticas.

Variables y operacionalización

La variable dependiente del estudio es la brecha electoral entre PPSO y el PLN, definida como la diferencia porcentual entre los votos válidos obtenidos por ambos partidos en cada cantón. Esta operacionalización presenta varias ventajas metodológicas. En primer lugar, captura simultáneamente la dirección del resultado electoral (qué partido aventaja a cuál) y su magnitud, lo que permite distinguir entre ventajas marginales y hegemonías territoriales. En segundo lugar, evita la pérdida de información asociada a variables dicotómicas de victoria/derrota, lo cual resulta particularmente problemático en contextos de competencia asimétrica.

La variable independiente principal es el Índice de Desarrollo Humano cantonal correspondiente a 2022. El IDH se utiliza aquí no como un indicador causal aislado, sino como un resumen sintético de trayectorias estructurales que incluyen el capital humano, el acceso a servicios y las condiciones materiales de vida. Su uso se justifica por su amplia adopción en estudios comparados y por su capacidad para captar diferencias territoriales persistentes que trascienden las coyunturas económicas de corto plazo.

Estrategia analítica

El análisis se desarrolló en varias etapas complementarias, diseñadas para evaluar progresivamente la forma, la intensidad y la estabilidad de la relación entre el IDH y la brecha electoral.

En una primera etapa descriptiva se examinaron la distribución, la tendencia central y la dispersión de ambas variables, con el fin de identificar asimetrías, valores extremos y rangos efectivos. Esta exploración preliminar permitió descartar supuestos de normalidad estricta y anticipar la necesidad de emplear técnicas robustas frente a la heterocedasticidad y la no normalidad.

En una segunda etapa, se evaluó la asociación bivariada mediante los coeficientes de correlación de Pearson y de Spearman. El uso conjunto de ambos

coeficientes obedeció a un criterio metodológico explícito: determinar si la relación observada era fundamentalmente lineal o, por el contrario, una asociación monotónica no necesariamente lineal.

Posteriormente, se estimó un modelo de regresión lineal ordinaria (OLS) con la brecha electoral como variable dependiente y el IDH como predictor principal. Este modelo se interpretó como una estimación del efecto promedio del desarrollo humano sobre la brecha electoral, reconociendo explícitamente sus limitaciones en contextos de heterogeneidad territorial.

Con el fin de superar estas limitaciones y evaluar la robustez del resultado, se incorporaron tres extensiones metodológicas clave. En primer lugar, se estimaron regresiones cuantílicas para distintos puntos de la distribución de la brecha electoral. Esta técnica permitió analizar si el efecto del IDH se mantenía entre cantones con ventajas pequeñas, moderadas y extremas, evitando que los resultados estuvieran dominados por el comportamiento de los valores medios o de los casos atípicos.

En segundo lugar, se aplicaron modelos de suavización local (LOESS) para explorar posibles no linealidades. A diferencia de los modelos paramétricos, el LOESS no impone una forma funcional predeterminada, lo que lo convierte en una herramienta adecuada para detectar umbrales, quiebres o curvaturas en la relación empírica. La comparación visual y sustantiva entre el ajuste LOESS y la recta OLS permitió evaluar si la linealidad observada era una construcción del modelo o una propiedad intrínseca de los datos.

En tercer lugar, se introdujeron controles territoriales cada vez más estrictos. Inicialmente, se incorporó una variable dicotómica que distingue entre los cantones pertenecientes a la Gran Área Metropolitana (GAM) y los que no, con el fin de evaluar si el IDH operaba de manera independiente de la centralidad metropolitana. Posteriormente, se estimaron modelos con efectos fijos por provincia, lo que permitió aislar la variación intraprovincial y comprobar si el desarrollo humano seguía estructurando la brecha electoral incluso dentro de unidades territoriales más homogéneas.

Consideraciones sobre inferencia y alcance

Es fundamental subrayar que el diseño ecológico del estudio limita cualquier inferencia causal a nivel individual. Los resultados no permiten afirmar que las personas con mayor o menor nivel educativo o de ingreso voten de determinada manera. Lo que sí permiten es identificar patrones agregados consistentes, que sugieren la existencia de clivajes territoriales asociados a trayectorias estructurales de desarrollo.

Lejos de constituir una debilidad, esta delimitación del alcance inferencial es coherente con el objetivo del estudio: comprender cómo el territorio, entendido como la condensación histórica de condiciones sociales, organiza la competencia política contemporánea.

Resultados

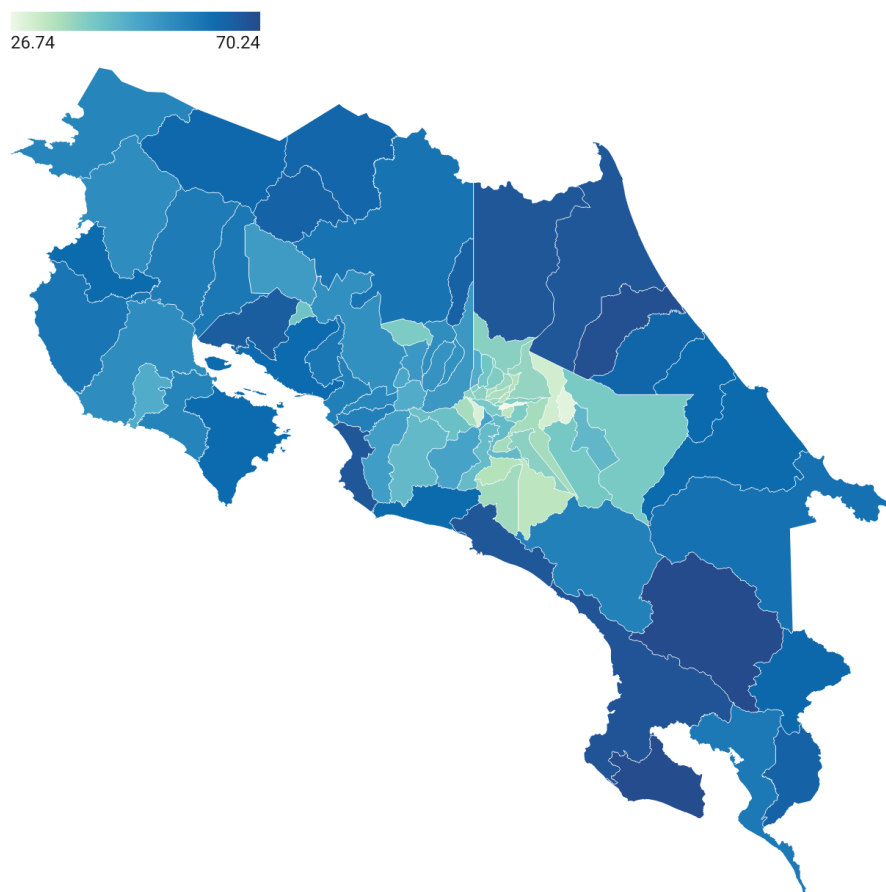
Distribución cantonal de la brecha electoral PPSO–PLN

El análisis de la brecha electoral entre el PPSO y el PLN a nivel cantonal revela, en primera instancia, una distribución amplia y asimétrica, lo que sugiere que la competencia entre ambas fuerzas políticas no se manifiesta de manera homogénea en el territorio.

Desde la representación en mapas coropléticos se pueden distinguir algunos patrones de esta brecha, la cual presenta valores que oscilan entre ventajas significativas del PLN en algunos cantones y ventajas muy amplias del PPSO en otros, con una mediana claramente positiva a favor de este último.

Figura 1. Porcentaje de votos válidos obtenidos por el Partido Pueblo Soberano en las elecciones presidenciales de 2026 en Costa Rica.

% de votos válidos obtenidos por el PPSO para la presidencia de la República. 1 de febrero de 2026

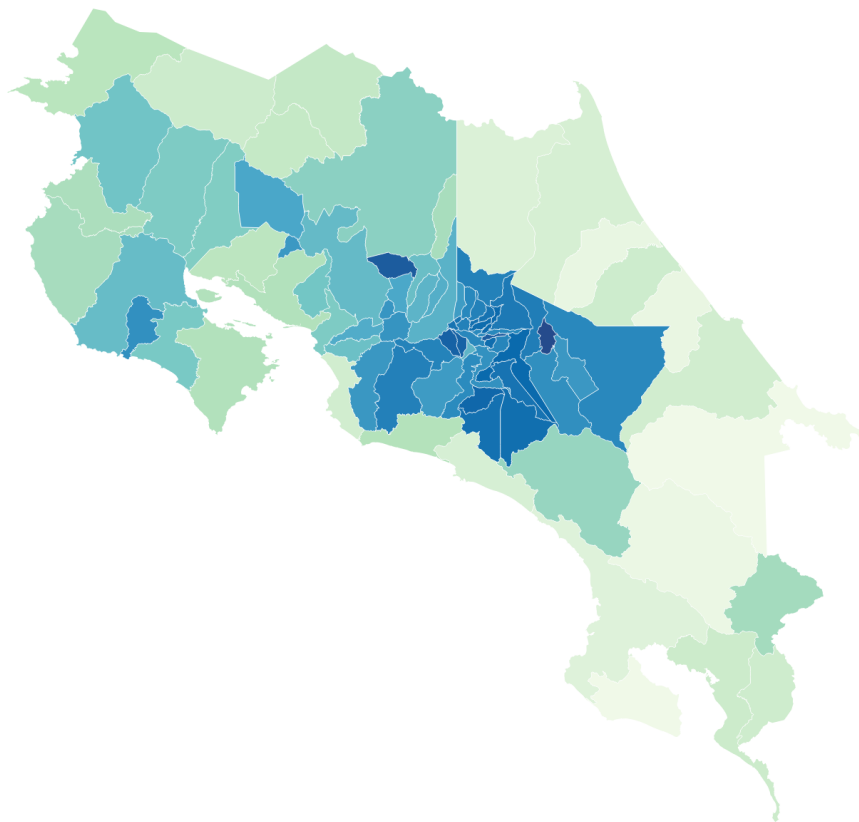


Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, 2026.

Figura 2. Porcentaje de votos válidos obtenidos por el Partido Liberación Nacional en las elecciones presidenciales de 2026 en Costa Rica.

% de votos válidos obtenidos por el PLN, para presidente de la República. 1 de febrero de 2026

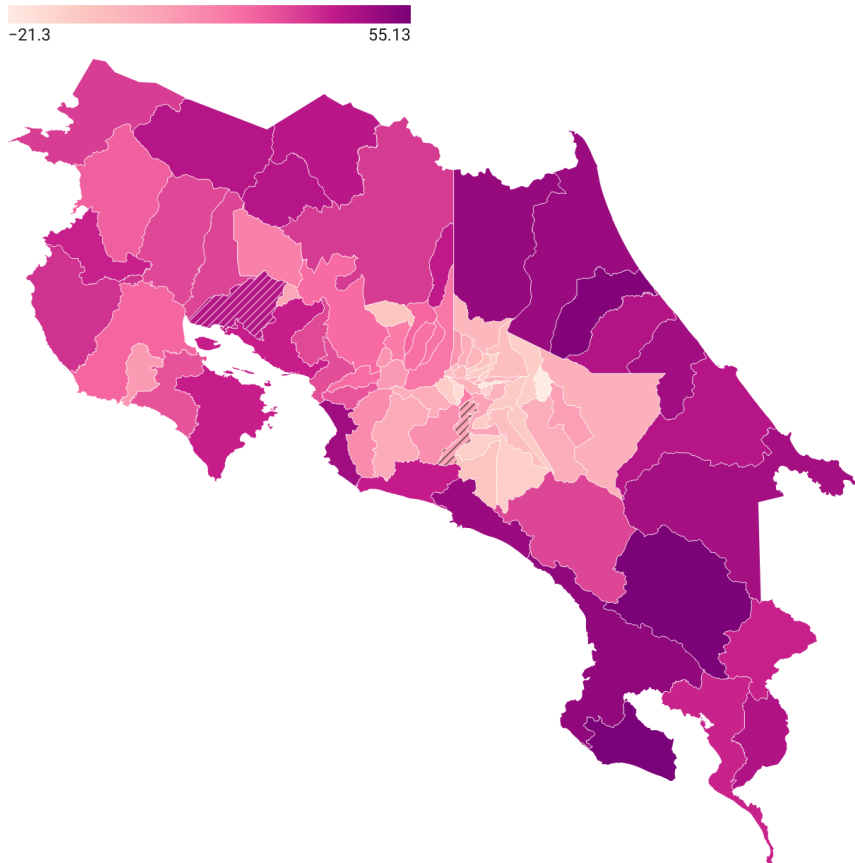
14,78 49,99



Fuente:Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, 2026.

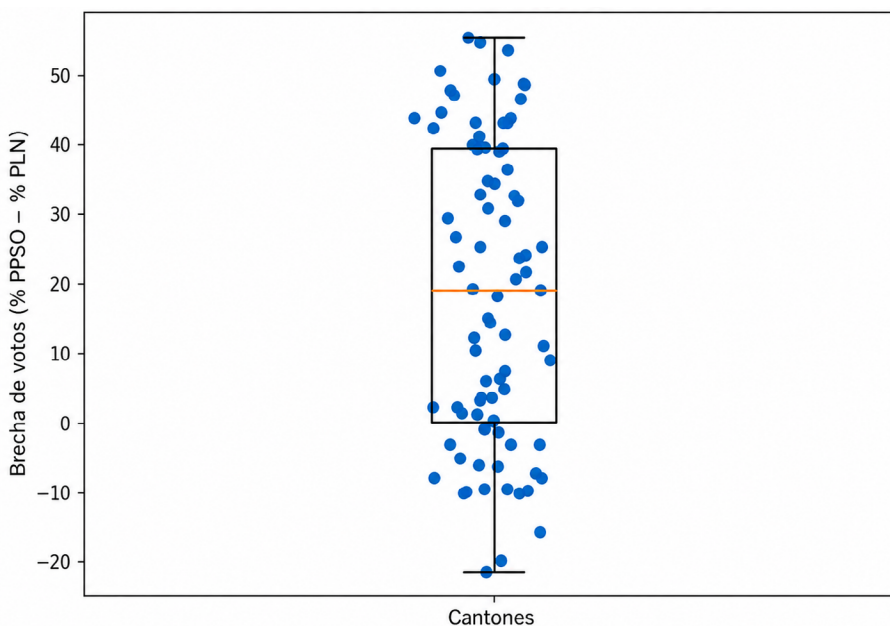
Figura 3. Brecha de votos válidos entre el PPSO y el PLN en las elecciones presidenciales de 2026 en Costa Rica.

Brecha de votos válidos entre PPSO y PLN. Elecciones para la presidencia de la República. 1 de febrero de 2026.



Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, 2026.

Figura 4. Box-plot que muestra la distribución de la brecha electoral entre el PPSO y el PLN en las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026.



- Media: 18.72 pp
- Mediana: 19.06 pp
- Desviación estándar: 21.26 pp
- Mínimo: -21.30 pp
- Q1 (25%): 0.25 pp
- Q3 (75%): 39.24 pp
- Máximo: 55.13 pp

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, 2026.

Este patrón inicial es relevante porque descarta, desde el inicio, una lectura de competencia equilibrada o de polarización simétrica. En términos agregados, el PPSO exhibe una ventaja territorial más intensa, aunque no necesariamente más extendida, mientras que el PLN concentra sus fortalezas en un subconjunto más acotado de cantones. La alta dispersión observada indica que cualquier explicación del fenómeno debe ser capaz de dar cuenta no solo del signo de la brecha, sino también de su variación sistemática entre territorios.

Asociación entre desarrollo humano y brecha electoral

Al introducir el Índice de Desarrollo Humano cantonal en el análisis, emerge un patrón empírico particularmente nítido. El gráfico de dispersión entre el IDH 2022 y la brecha PPSO–PLN muestra una nube de puntos claramente inclinada en sentido negativo: a medida que aumenta el desarrollo humano del cantón, la ventaja electoral del PPSO tiende a reducirse y, en los valores más altos de IDH, a invertirse a favor del PLN.

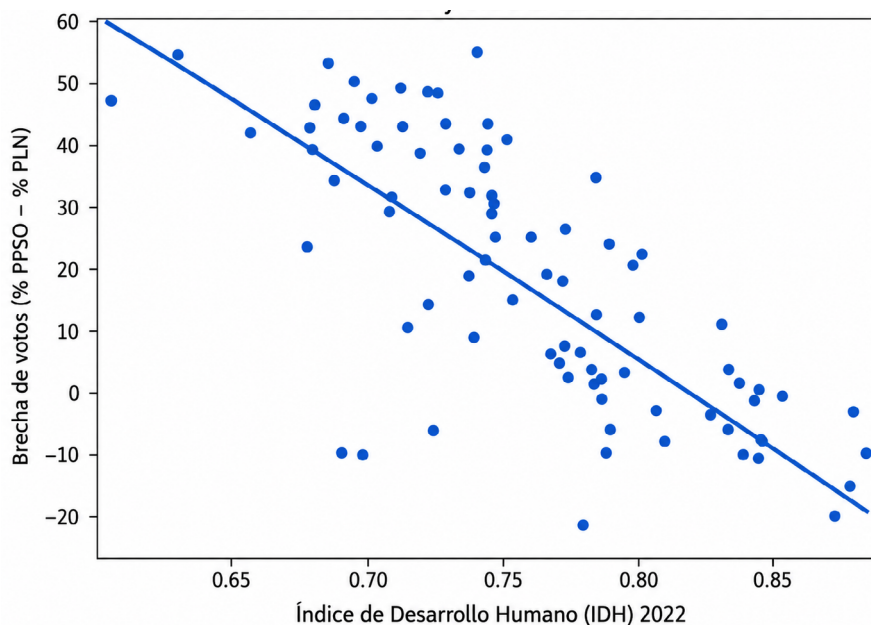
Este gráfico no sugiere una relación débil ni fragmentada, sino un gradiente continuo, con relativamente poca dispersión en torno a la tendencia central. La pendiente negativa no está dominada por unos pocos casos extremos, sino que se observa a lo largo de prácticamente todo el rango del IDH observado.

La correlación negativa elevada, confirmada tanto por el coeficiente de Pearson ($r = -0.740$, $p \approx 9.44 \times 10^{-16}$) como por el de Spearman ($\rho = -0.728$, $p \approx 4.40 \times 10^{-15}$), refuerza esta impresión visual y sugiere que el desarrollo humano ordena de manera consistente la competencia electoral entre ambos partidos. En tanto, la regresión lineal ordinaria confirma una fuerte asociación negativa entre el desarrollo humano cantonal y la brecha electoral entre el PPSO y el PLN.

El modelo estimado indica que el IDH 2022 explica aproximadamente el 55 % de la variación observada en la brecha electoral ($R^2 = 0.547$). La pendiente estimada ($\beta_1 = -264.18$) sugiere que un incremento de 0.10 puntos en el IDH se asocia, en promedio, con una reducción de cerca de 26.4 puntos porcentuales en la ventaja electoral del PPSO, lo que evidencia la magnitud sustantiva del gradiente socioterritorial que estructura la competencia política.

La magnitud del coeficiente tiene implicaciones sustantivas: incrementos relativamente modestos en el IDH se asocian con reducciones de gran magnitud en la brecha PPSO–PLN. En el contexto de los estudios territoriales comparados, donde los fenómenos políticos suelen verse influidos por múltiples factores simultáneos, este nivel de varianza explicada por una sola variable estructural resulta notable.

Figura 5. Diagrama de dispersión que muestra la relación entre la brecha electoral entre el PPSO y el PLN en las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026 y el IDH de 2022.



$$\widehat{\text{Brecha}}_i = 219.44 - 264.18 \cdot \text{IDH}_{2022,i}$$

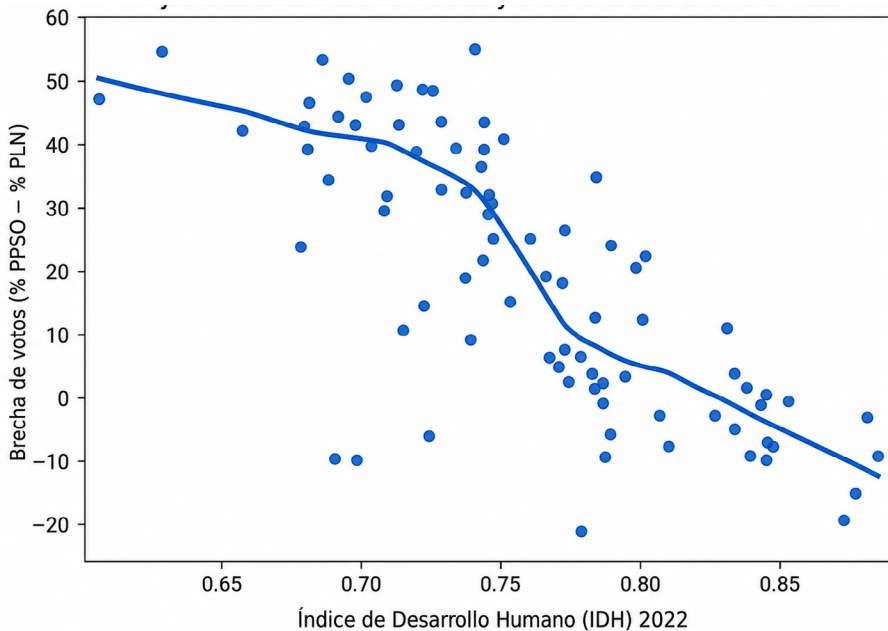
Fuente: Elaboración propia datos del Tribunal Supremo de Elecciones (2026) y PNUD (2022).

Desde una perspectiva real, este resultado implica que el desarrollo humano no actúa como un mero factor contextual marginal, sino como un eje estructurante de la brecha electoral. Los cantones con niveles más bajos de IDH tienden a exhibir ventajas significativas para el PPSO, mientras que los cantones con IDH más alto presentan brechas menores, nulas o incluso negativas. Esto sugiere que el desarrollo humano no solo está asociado al signo del resultado electoral, sino también a la intensidad de la competencia entre ambos partidos.

Linealidad de la relación y ausencia de umbrales

El ajuste no paramétrico mediante suavizamiento local (LOESS) confirma la existencia de una relación negativa sostenida entre el IDH cantonal y la brecha electoral entre PPSO y PLN. Si bien se observan variaciones locales en la pendiente —con un descenso algo más pronunciado en el tramo medio del IDH—, no se identifican quiebres abruptos ni umbrales claros en el comportamiento electoral. En conjunto, el patrón observado respalda la idoneidad del modelo lineal como una aproximación parsimoniosa al gradiente socioterritorial subyacente (Figura 6).

Figura 6. Ajuste de LOESS entre el IDH 2022 y la brecha electoral entre el PPSO y el PLN en las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026.



Fuente: Elaboración propia datos del Tribunal Supremo de Elecciones (2026) y PNUD (2022).

Este hallazgo es particularmente importante desde el punto de vista interpretativo. No se observa un punto crítico del IDH a partir del cual el comportamiento electoral cambie abruptamente. En su lugar, el efecto del desarrollo humano sobre la brecha electoral parece operar de manera gradual y acumulativa. Cada incremento marginal del IDH se asocia con una reducción proporcional de la ventaja del PPSO sobre el PLN.

En términos analíticos, esto refuerza la idea de que el clivaje observado no responde a una lógica dicotómica —por ejemplo, “cantones desarrollados versus cantones rezagados”—, sino a un continuo socioterritorial en el que el desarrollo humano reordena progresivamente las preferencias electorales.

Heterogeneidad distributiva: evidencia de la regresión cuantílica

La regresión cuantílica permite evaluar si este efecto se limita al promedio o, por el contrario, se mantiene a lo largo de toda la distribución de la brecha electoral. En este caso, los resultados muestran que la asociación negativa entre el IDH cantonal y la brecha electoral PPSO–PLN se mantiene a lo largo de toda la distribución de esta brecha. Sin embargo, la magnitud del efecto aumenta progresivamente desde los cuantiles bajos hasta los altos, pasando de -190.7 en el cuantil 0.10 a -308.5 en el cuantil 0.90.

Cuadro 1. Resultados de la regresión cuantílica de la relación entre el IDH cantonal y la brecha electoral PPSO–PLN en las elecciones presidenciales de 2026.

Cuantil	Intercepto (β_0)	Pendiente IDH (β_1)	p-valor (IDH)
0.10	146.83	-190.73	< 0.001
0.25	193.43	-241.60	< 0.001
0.50	229.80	-275.17	< 0.001
0.75	260.29	-304.51	< 0.001
0.90	268.91	-308.51	< 0.001

Fuente: Elaboración propia datos del Tribunal Supremo de Elecciones (2026) y PNUD (2022).

Este patrón sugiere que el desarrollo humano no solo reduce la brecha promedio, sino que también ejerce un efecto particularmente fuerte en los cantones con ventajas electorales más amplias para el PPSO, lo que contribuye a la compresión de las brechas extremas.

Este resultado indica que el desarrollo humano no solo diferencia entre cantones “competitivos” y “no competitivos”, sino que también determina la magnitud de la ventaja electoral en todos los contextos. En otras palabras, incluso entre cantones donde el PPSO obtiene apoyos muy elevados, se asocian niveles más altos de desarrollo humano con brechas menos extremas.

Desde una perspectiva metodológica, este hallazgo descarta la posibilidad de que la relación observada se deba exclusivamente a los valores centrales o a un subconjunto de casos extremos, lo que refuerza su carácter estructural.

Control territorial y persistencia del efecto

La introducción de controles territoriales permite evaluar si la asociación entre el IDH y la brecha electoral se debe simplemente a diferencias regionales amplias. Al controlar por la pertenencia a la Gran Área Metropolitana, el efecto del IDH se atenúa ligeramente, pero sigue siendo claramente negativo y significativo. Esto indica que, si bien la centralidad metropolitana influye en el nivel general de la brecha, no explica por sí sola el gradiente observado.

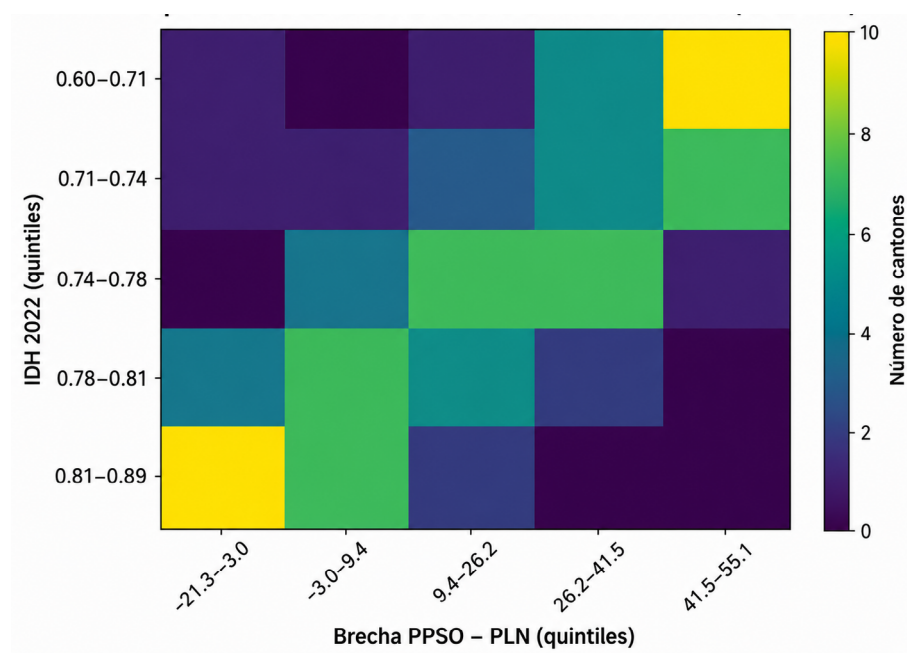
Este resultado se refuerza al introducir efectos fijos por provincia. Aun comparando cantones dentro de la misma provincia —es decir, en contextos regionales relativamente homogéneos—, el IDH continúa mostrando una asociación sistemática con la brecha electoral. En términos sustantivos, esto implica que el desarrollo humano opera dentro de los territorios, no solo entre ellos.

Visualización conjunta: el mapa de calor IDH–brecha

El mapa de calor que cruza los quintiles de IDH con los de la brecha electoral sintetiza visualmente los resultados anteriores. La concentración de cantones en una diagonal descendente —desde IDH bajo y brechas altas a favor del PPSO, hasta IDH alto y brechas reducidas o negativas— ofrece una representación gráfica poderosa del clivaje socio-territorial identificado.

Este gráfico permite apreciar, de un solo vistazo, que la relación no es producto de una dicotomía simple, sino de una redistribución gradual de los cantones a lo largo del eje de desarrollo humano. La escasez de cantones en las combinaciones “IDH alto–brecha PPSO alta” o “IDH bajo–brecha PLN alta” refuerza la interpretación de un patrón altamente estructurado.

Figura 7. Mapa de calor de la brecha electoral entre el PPSO y el PLN en las elecciones presidenciales de Costa Rica de 2026, por quintiles.



Fuente: Elaboración propia datos del Tribunal Supremo de Elecciones (2026) y PNUD (2022).

Síntesis de los hallazgos empíricos

En conjunto, los resultados muestran que la brecha electoral entre el PPSO y el PLN se encuentra estrechamente asociada al nivel de desarrollo humano cantonal, de manera lineal, consistente y robusta en múltiples especificaciones analíticas. El desarrollo humano no actúa como una variable explicativa marginal, sino como un principio organizador del espacio electoral, capaz de ordenar tanto la dirección como la magnitud de la competencia entre ambos partidos.

Este conjunto de evidencias empíricas sienta las bases para una discusión más amplia sobre la naturaleza del clivaje político observado y sus implicaciones para la comprensión del sistema político costarricense, cuestión que se aborda en la siguiente sección.

Discusión

El significado sustantivo de una relación fuerte y lineal

El hallazgo central de este estudio —la relación negativa, fuerte y lineal entre el Índice de Desarrollo Humano cantonal y la brecha electoral entre el PPSO y el PLN— tiene implicaciones que van más allá de la mera descripción de un resultado electoral específico. La evidencia sugiere que la competencia política entre ambas fuerzas no se distribuye de manera aleatoria ni responde únicamente a dinámicas coyunturales, sino que se organiza estructuralmente a lo largo de un gradiente de desarrollo humano.

La fuerza de esta relación, así como su estabilidad frente a exigentes especificaciones metodológicas, la sitúa en el terreno de los clivajes socioterritoriales, tal como han sido conceptualizados en la literatura comparada. En contraste con lecturas dicotómicas del territorio (centro/periferia, urbano/rural, GAM/resto del país), los resultados muestran que el conflicto electoral adopta una forma continua, en la que incrementos graduales en el desarrollo humano se asocian con desplazamientos igualmente graduales en la magnitud y dirección de la brecha electoral.

Este patrón empírico es coherente con una reinterpretación contemporánea de la teoría de los clivajes. Si bien Lipset y Rokkan (1967) concebían los

clivajes como conflictos históricos cristalizados en estructuras partidarias relativamente estables, investigaciones más recientes han mostrado que dichos clivajes pueden reconfigurarse en contextos de transformación económica, educativa y territorial. El caso costarricense analizado aquí parece inscribirse en esta lógica de reconfiguración, en la que el desarrollo humano —y no únicamente la clase social o la geografía política clásica— emerge como eje organizador del comportamiento electoral agregado.

Aunque el desarrollo humano emerge como un eje estructurante central del comportamiento electoral territorial, es probable que este indicador sintetice procesos estructurales más amplios asociados a la inserción productiva de los territorios, a las condiciones de seguridad y a las trayectorias institucionales locales, que guardan relación con la categoría de fragilidad territorial.

Desarrollo humano, territorio y la geografía del descontento

Los resultados dialogan directamente con la literatura sobre la geografía del descontento y la territorialización del conflicto político. Rodríguez-Pose (2018) argumenta que el apoyo a opciones políticas disruptivas o anti-establishment se concentra en territorios que experimentan rezago relativo, pérdida de oportunidades o desconexión respecto de los centros de decisión. En esta perspectiva, no es la pobreza absoluta la que estructura el descontento, sino las trayectorias territoriales diferenciadas de desarrollo y de expectativas.

La asociación casi lineal observada entre el IDH y la brecha electoral es coherente con este enfoque. Cantones con menor desarrollo humano —que suelen enfrentar mayores déficits en educación, acceso a servicios y oportunidades económicas— muestran amplias ventajas electorales para el PPSO, mientras que cantones con niveles más altos de IDH tienden a reducir esa ventaja o a inclinarse a favor del PLN. El patrón no sugiere una reacción puntual, sino una acumulación de efectos estructurales, lo que refuerza la idea de que los territorios funcionan como depósitos de historia social y económica.

Este argumento se ve reforzado por estudios comparados en Europa, donde Dijkstra, Poelman y Rodríguez-Pose (2020) documentan cómo el descontento político se distribuye territorialmente a lo largo de trayectorias regionales diferenciadas, más que a lo largo de simples límites administrativos. En ese sen-

tido, el uso del IDH como indicador sintético permite captar las dimensiones de estas trayectorias sin reducirlas a una única variable económica.

En este sentido, el IDH puede interpretarse como una puerta de entrada analítica a configuraciones territoriales más complejas, en las que dimensiones como la estructura económica, la capacidad institucional y las condiciones de seguridad interactúan para moldear el comportamiento político.

Linealidad, gradientes y ausencia de umbrales

Uno de los aspectos más relevantes de los resultados es la ausencia de quiebres y de efectos umbral en la relación entre el desarrollo humano y la brecha electoral. Tanto el ajuste LOESS como la estabilidad del coeficiente del IDH en la regresión cuantílica indican que no existe un punto crítico a partir del cual el comportamiento electoral cambie abruptamente. En su lugar, la relación adopta la forma de un gradiente continuo.

Este hallazgo tiene importantes implicaciones teóricas. En la literatura sobre polarización y realineamientos electorales, se ha señalado que muchos análisis tienden a sobrerrepresentar divisiones binarias —por ejemplo, ganadores versus perdedores de la globalización— cuando, en realidad, los procesos sociales subyacentes operan de manera gradual (Kriesi et al., 2012). La evidencia presentada aquí respalda esta segunda interpretación: el desarrollo humano no divide el territorio en dos bloques homogéneos, sino que reordena progresivamente el espacio político.

Desde el punto de vista metodológico, la fuerte linealidad observada refuerza la validez de interpretar el IDH como una variable estructural continua y no como un simple marcador categórico. Desde el punto de vista sustantivo, sugiere que incluso diferencias incrementales en las condiciones de vida pueden traducirse en desplazamientos políticamente significativos.

Robustez distributiva y carácter estructural del clivaje

La regresión cuantílica aporta un elemento adicional a la discusión: el efecto del desarrollo humano no se limita a los cantones “promedio”, sino que se mantiene a lo largo de toda la distribución de la brecha electoral. Esto implica

que el IDH estructura tanto los contextos de competencia cerrada como los de hegemonía territorial marcada.

Este resultado es particularmente relevante a la luz de estudios como los de Autor et al. (2020), que muestran cómo los shocks económicos territorialmente concentrados pueden tener efectos políticos persistentes y heterogéneos. Aunque el presente estudio no identifica shocks específicos ni establece relaciones causales, sí muestra que los efectos territoriales del desarrollo se manifiestan de manera consistente en distintos niveles de intensidad electoral, lo que refuerza su interpretación como un clivaje estructural y no como mero artefacto estadístico.

Territorio, centralidad y desarrollo humano

El control por pertenencia a la Gran Área Metropolitana y, posteriormente, por provincia permite refinar aún más la interpretación. Si el IDH hubiera actuado únicamente como un proxy de centralidad geográfica, su efecto habría desaparecido al introducir estos controles. Sin embargo, los resultados muestran que el desarrollo humano mantiene una asociación significativa con la brecha electoral incluso dentro de los territorios.

Este hallazgo coincide con aportes recientes que distinguen entre la geografía física y la geografía social. En el debate europeo, se ha argumentado que la oposición “ciudad versus campo” es insuficiente para explicar los patrones electorales contemporáneos, y que resulta más fructífero analizar cómo se distribuyen el capital humano, las oportunidades y la densidad institucional dentro de los territorios (Goodhart, 2017; Gethin et al., 2022). El caso costarricense analizado aquí refuerza esta idea: no es únicamente la ubicación geográfica lo que importa, sino la calidad del desarrollo humano asociado a cada territorio.

Alcances y límites interpretativos

Es importante subrayar que los resultados no permiten inferir causas a nivel individual. El diseño ecológico del estudio impide afirmar que las personas con determinados niveles de educación, ingresos o salud voten de manera específica. Sin embargo, esta limitación no invalida la interpretación estructural

del fenómeno. Como señalan Robinson (1950) y la literatura posterior sobre inferencia ecológica, los análisis territoriales son apropiados —y necesarios— cuando el objetivo es comprender cómo los contextos sociales agregados organizan patrones colectivos. Esta mirada es más consistente con el enfoque de la sociología política y menos cercana a los estudios de opinión.

En este sentido, el aporte principal del estudio no es explicar el comportamiento individual del votante, sino mostrar que el espacio político costarricense presenta una estratificación socioterritorial clara, en la que el desarrollo humano opera como principio organizador del conflicto electoral.

Implicaciones para el estudio del sistema político costarricense

Los hallazgos invitan a reconsiderar algunas interpretaciones habituales del sistema político costarricense. En lugar de concebir la competencia entre el PPSO y el PLN como un enfrentamiento puramente discursivo o personalista, la evidencia sugiere que esta competencia expresa tensiones más profundas asociadas a desigualdades territoriales persistentes.

Desde esta perspectiva, el desarrollo humano no es solo un contexto de fondo, sino un elemento que estructura las oportunidades políticas, las percepciones de representación y los alineamientos partidarios. Ignorar esta dimensión implica correr el riesgo de interpretar los resultados electorales como episodios aislados, cuando en realidad responden a procesos de más largo plazo.

Cierre de la discusión

En conjunto, la discusión sugiere que la brecha electoral entre el PPSO y el PLN constituye una manifestación empírica de un clivaje socioterritorial continuo, coherente con patrones observados en democracias comparables. El desarrollo humano emerge como una variable clave para comprender la organización territorial del voto, aunque probablemente actúe como un indicador sintético de procesos estructurales más amplios asociados a las trayectorias de desarrollo de los territorios.

Este enfoque abre la puerta a futuras investigaciones que profundicen en los mecanismos específicos —institucionales, económicos y culturales— me-

dian­te los cua­les el de­sar­rol­lo hu­ma­no se tra­duce en pre­fe­ren­cias po­lí­ti­cas, así co­mo a aná­li­sis lon­gi­tu­di­na­les que evalúen la es­ta­bi­li­dad de este cli­va­je a lo lar­go del tie­mpo.

De esa for­ma, sus re­sul­ta­dos tam­bién re­fuer­zan una lí­nea de in­ves­ti­ga­ción que ex­plo­ra cómo es­tas de­si­gual­da­des ter­ri­to­ria­les en el de­sar­rol­lo hu­ma­no se arti­cu­lan con con­fi­gu­ra­cio­nes más am­plias de fra­gi­li­dad ter­ri­to­ria­l y con pro­ce­so­so de re­com­po­si­ción de las a­lia­n­zas so­cio­po­lí­ti­cas en Co­sta Ri­ca.

Conclusiones

El aná­li­sis can­to­nal de la bre­cha elec­to­ral en­tre el PPSO y el PLN mue­stra que el de­sar­rol­lo hu­ma­no con­sti­tu­ye un eje es­truc­tu­ran­te cen­tral del com­por­ta­mien­to elec­to­ral en Co­sta Ri­ca. La re­la­ción ne­ga­ti­va, fue­rte y no­ta­ble­men­te lí­nea­l en­tre el Ín­di­ce de De­sar­rol­lo Hu­ma­no y la ma­gnitud de la bre­cha PPSO–PLN se man­tiene es­ta­ble a lo lar­go de to­da la dis­tri­bu­ción del re­sul­ta­do elec­to­ral, no pre­sen­ta quie­bres ni efec­to­so um­bral y per­sis­te in­clu­so tras in­tro­ducir con­tro­les ter­ri­to­ria­les exi­gen­tes.

Este con­jun­to de evi­den­cias per­mite afir­mar que la com­pe­ten­cia en­tre am­bas fuer­zas po­lí­ti­cas no se ex­pli­ca ade­cu­a­da­men­te me­diante di­co­to­mías ter­ri­to­ria­les sím­ples ni por fac­to­res co­yun­tu­ra­les, si­no que re­spo­nde a un gra­di­en­te so­cio­te­rrito­ria­l con­ti­nuo, aso­cia­do a tra­yec­to­rias di­fe­ren­cia­das de de­sar­rol­lo hu­ma­no.

Des­de una per­spec­ti­va an­alí­ti­ca más am­plia, es­to­so hallaz­gos su­gie­ren que el con­flic­to elec­to­ral ob­ser­va­do ex­pre­sa un cli­va­je es­truc­tu­ral re­con­fi­gu­ra­do, co­he­ren­te con la li­te­ra­tu­ra com­pa­ra­da so­bre la ter­ri­to­ria­li­za­ción del des­con­ten­to y la re­or­ga­ni­za­ción con­tem­po­rá­nea de los a­li­nea­mien­to­so po­lí­ti­co­so. El de­sar­rol­lo hu­ma­no ope­ra aquí no co­mo un de­ter­mi­nan­te in­di­vi­du­al del vo­to, si­no co­mo una con­di­ción a­gre­ga­da del ter­ri­to­rio que mol­dea con­tex­to­so de com­pe­ten­cia, o­por­tu­ni­da­des po­lí­ti­cas y pa­tro­ne­so de re­pre­sen­ta­ción.

Visto­so es­to­so re­sul­ta­do­so en per­spec­ti­va, no­so per­miten sus­ten­tar el aná­li­sis de las elec­cio­ne­so pre­si­den­cia­le­so de 2026 co­mo un mo­men­to cla­ve en las trans­for­ma­cio­ne­so del sis­te­ma po­lí­ti­co co­star­ri­cen­se, ca­rac­te­ri­za­do por el de­bi­li­ta­mien­to del bi­par­ti­dis­mo his­tó­ri­co, la fra­gmen­ta­ción del sis­te­ma de par­ti­do­so y la vo­la­

tilidad electoral. Como lo muestra la relación entre el IDH y la brecha electoral entre los dos partidos más votados, estas elecciones también evidencian la territorialización de la declinación del bipartidismo histórico y la emergencia de nuevos conglomerados y alianzas políticas a escala local.

Esa evidencia de la geografía electoral concuerda con una diferenciación territorial en las trayectorias de desarrollo social y económico del país. En el análisis queda de manifiesto que la reorganización del espacio político puede explicarse, al menos en parte, como la manifestación electoral de un clivaje socioterritorial más profundo, vinculado a la acumulación de desigualdades en las condiciones de vida y en las oportunidades de desarrollo entre los distintos territorios del país.

Reconocer este gradiente resulta clave para comprender la dinámica del sistema político costarricense y plantea la necesidad de incorporar de manera sistemática la dimensión del desarrollo territorial en el análisis de los procesos electorales y de la calidad democrática.

Finalmente, leídos en clave comparada, estos hallazgos sugieren que el caso costarricense no solo dialoga con debates sobre la geografía del descontento, nuevos clivajes y realineamientos políticos, sino que también contribuye a complejizarlos. Más que mostrar únicamente que las desigualdades territoriales pueden asociarse a expresiones políticas del malestar o a fracturas entre sectores diferencialmente insertos en la globalización, el análisis sugiere que dichas desigualdades pueden intervenir en la propia reorganización territorial del conflicto político.

Desde esta perspectiva, el caso costarricense permite pensar que, en contextos latinoamericanos atravesados por fragilidades institucionales y tensiones hegemónicas, el desarrollo desigual no opera solo como trasfondo del descontento, sino también como una dimensión que estructura nuevas configuraciones de clivaje.

En esa misma línea, los resultados abren una agenda de investigación que trasciende tanto la eventual incorporación de nuevas herramientas analíticas como la profundización en un único enfoque disciplinario. Más ampliamente, sugieren la necesidad de seguir desarrollando cruces entre marcos conceptua-

les, estrategias metodológicas y tradiciones analíticas que rara vez dialogan de manera sistemática en el estudio de la política en Costa Rica.

Más que una invitación a la sofisticación de las técnicas, esta agenda apunta a profundizar un campo interdisciplinario de investigación en el que geografía crítica, economía política, epidemiología crítica y sociología política puedan contribuir, desde sus propios lenguajes, a una comprensión más amplia de las relaciones entre desigualdad territorial, conflicto político y recomposición democrática. En ese sentido, el estudio sugiere que territorializar el análisis electoral también puede ser una vía para repensar la democracia desde el territorio.

REFERENCIAS

- Autor, David, David Dorn, Gordon Hanson y Kaveh Majlesi. 2020. Importing political polarization? The electoral consequences of rising trade exposure. *American Economic Review* 110, núm 10, <https://doi.org/10.1257/aer.20170011>
- Dijkstra, Lewis, Hugo Poelman y Andrés Rodríguez-Pose. 2020. The geography of EU discontent. *Regional Studies* 54, núm 6, <https://doi.org/10.1080/00343404.2019.1654603>
- Gethin, Amory, Clara Martínez-Toledano y Thomas Piketty. 2022. Changing political cleavages in 21 Western democracies, 1948–2020. *The Quarterly Journal of Economics* 137, núm 1, <https://doi.org/10.1093/qje/qjab036>
- Goodhart, David. 2017. *The road to somewhere: The new tribes shaping British politics*. UK: Penguin Books.
- Kriesi, Hanspeter, Edgar Grande, Martin Dolezal, Marc Helbling, Dominic Höglinger, Swen Hutter, and Bruno Wüest. 2012. *Political conflict in Western Europe*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Lipset, Seymour y Stein Rokkan. 1967. *Party systems and voter alignments: Cross-national perspectives*. Free Press.

- Norris, Pippa y Ronald Inglehart. 2019. *Cultural backlash: Trump, Brexit, and authoritarian populism*. Cambridge: Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/9781108595841>
- Piketty, Thomas. 2018. *Brahmin left vs. merchant right: Rising inequality and the changing structure of political conflict*. EHESS and Paris School of Economics, WID Working Paper No. 2018/7. Paris: World Inequality Lab.
- Robinson, W. S. 1950. Ecological correlations and the behavior of individuals. *American Sociological Review* 15, núm 3, <https://doi.org/10.2307/2087176>
- Rodríguez-Pose, Andrés. 2018. The revenge of the places that don't matter (and what to do about it). *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 11, núm 1, <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
- Santos, Milton. 1996. *La naturaleza del espacio: técnica y tiempo, razón y emoción*. Barcelona: Ariel.

CRISIS HEGEMÓNICA Y GEOGRAFÍA ELECTORAL EN COSTA RICA: FRAGILIDAD TERRITORIAL Y RECONFIGURACIÓN POLÍTICA EN 2026

Abelardo Morales Gamboa

Introducción

Este artículo analiza la relación entre fragilidad territorial y reconfiguración política en las elecciones nacionales de Costa Rica de 2026, situando el caso dentro de los debates latinoamericanos sobre desigualdad subnacional y crisis de los partidos tradicionales. Desde una perspectiva de economía política comparada y de la teoría gramsciana del bloque histórico, se examina la variación cantonal en la diferencia porcentual de votos entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN). La fragilidad territorial se operacionaliza mediante indicadores de desarrollo social, de competitividad económica y de violencia letal. Los resultados muestran asociaciones sistemáticas entre la desigualdad territorial acumulada y el desplazamiento electoral, lo que sugiere que incluso las democracias consideradas estables experimentan procesos de recomposición hegemónica territorialmente diferenciada.

Más que un hecho súbito, la reconfiguración política observada en Costa Rica en las elecciones de 2026 forma parte de una transformación más amplia de las hegemonías desarrollistas latinoamericanas, en la que la acumulación de desigualdades territoriales y la fragmentación diferenciada de las capacidades institucionales resitúan las bases espaciales del poder político. En diversos países de la región, la erosión de los pactos sociales que sustentaron los sistemas de partidos del siglo XX ha dado lugar a realineamientos electorales anclados en brechas subnacionales persistentes.

Se produce una crisis que no se manifiesta únicamente en la volatilidad partidaria, sino también en la territorialización del conflicto político, sobre todo en aquellos contextos donde el desarrollo geográfico desigual y la erosión de la densidad institucional alteran los mecanismos tradicionales de integración social. En este contexto regional, el caso costarricense —históricamente interpretado como excepcional por la estabilidad de su sistema político— ofrece una oportunidad para analizar cómo la fragilidad territorial puede operar como condición estructural de recomposición hegemónica y de reconfiguración electoral.

En ese país, las elecciones nacionales de 2026 revelaron una configuración territorial del voto que desafía las interpretaciones centradas exclusivamente en la alternancia partidaria. Esto podría considerarse un dato meramente circunstancial. Pero el diferencial de votos a favor del Partido Pueblo Sobrano (PPSO) frente al Partido Liberación Nacional (PLN) mostró patrones de concentración electoral en cantones con menores niveles de desarrollo social, medido a partir del Índice de Desarrollo Humano (Romero Zúñiga y Morales Gamboa, 2026), menor competitividad económica y mayores tasas de violencia letal. Esta geografía electoral sugiere que el desplazamiento político no puede comprenderse únicamente como protesta coyuntural, sino como manifestación territorialmente diferenciada de una erosión más profunda del bloque histórico que durante décadas articuló clases medias, Estado social y élites económicas. Este artículo sostiene que la acumulación de fragilidad territorial constituye una condición estructural que explica la territorialización de la recomposición hegemónica en la Costa Rica contemporánea.

Un antecedente relevante para este estudio ha sido el trabajo de Romero Zúñiga y Morales Gamboa sobre el desarrollo humano y el clivaje electoral en Costa Rica -de este dossier-, que documenta la relación entre la desigualdad territorial y el comportamiento electoral en el ciclo electoral reciente. Sus resultados muestran que los patrones de votación en febrero de 2026 no se distribuyen de manera homogénea en el territorio, sino que se articulan con brechas persistentes en el desarrollo humano.

Este trabajo retoma y amplía esa línea de investigación al incorporar una perspectiva de economía política comparada y un marco conceptual centrado en la fragilidad territorial y en la crisis hegemónica. Si bien Romero Zúñiga y Mo-

rales Gamboa enfatizan la dimensión socioeconómica del clivaje electoral, el presente trabajo integra, además, la dimensión institucional vinculada a la violencia letal y a la cobertura institucional diferenciada, con el fin de ofrecer una interpretación más amplia de la reconfiguración política observada en 2026.

Otro antecedente fundamental es la investigación de Sandoval García y colaboradores (Sandoval García *et. al.*, 2025) sobre las nuevas cartografías sociales de Costa Rica, que evidencia configuraciones territoriales diferenciadas en las que se concentran desigualdades demográficas, económicas y políticas. Sus hallazgos muestran que las brechas territoriales no son coyunturales, sino estructurales y persistentes.

El presente artículo dialoga con esta perspectiva cartográfica al reinterpretar dichas configuraciones como expresiones de fragilidad territorial, entendida no solo como rezago socioeconómico, sino también como acumulación de vulnerabilidades que erosionan las capacidades institucionales y los vínculos de integración social. Desde esta óptica, las cartografías sociales también constituyen cartografías de la crisis hegemónica.

A partir de este encuadre, el presente artículo plantea las siguientes preguntas: ¿Existe una asociación sistemática entre las configuraciones cantonales de fragilidad territorial y la variación en los resultados electorales de 2026? ¿En qué medida la acumulación de desigualdades socioeconómicas y la exposición a la violencia letal contribuyen a explicar el desplazamiento territorial del voto?

La hipótesis central sostiene que la geografía electoral emergente constituye la manifestación territorializada de una crisis hegemónica, en la medida en que los cantones con mayores niveles de fragilidad acumulada registran desplazamientos más marcados respecto del eje político tradicional. Para evaluar esta proposición, se desarrolla un análisis cuantitativo de alcance cantonal que integra indicadores de desarrollo social, competitividad económica y violencia.

El modelo político que emergió tras 1948 puede interpretarse como la consolidación de un bloque histórico en sentido gramsciano: una articulación relativamente estable entre la estructura económica, la institucionalidad esta-

tal y la dirección moral e intelectual, capaz de reproducir el consenso social (Gramsci, 1981). Como ha señalado Poulantzas (1978), el Estado condensa materialmente las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase, y las territorializa mediante políticas públicas e instituciones.

En el caso que analizamos, este bloque descansó en la expansión del Estado social, la integración territorial progresiva, la movilidad ascendente a través de la educación pública y la consolidación de amplias clases medias que actuaron como mediadoras entre las élites económicas y los sectores populares.

Sin embargo, las transformaciones asociadas a la globalización, la apertura comercial y la reestructuración productiva alteraron progresivamente las bases materiales del consenso. La acumulación capitalista produce diferenciaciones espaciales que jerarquizan los territorios según su funcionalidad para el régimen de acumulación (Harvey, 2003). Brenner (2004) ha mostrado cómo la reestructuración neoliberal implica procesos de reescalamiento estatal que redistribuyen de manera desigual las capacidades institucionales en el territorio. Como resultado, algunos espacios se integran dinámicamente a circuitos globales, mientras que otros experimentan estancamiento, precarización e inserción subordinada.

A partir de esa mirada, la crisis de la hegemonía no se manifiesta de manera homogénea, sino de manera territorialmente diferenciada. Rodríguez-Pose (2018) ha advertido sobre la emergencia de una “geografía del descontento” en territorios donde se percibe haber quedado al margen de los beneficios de la globalización. De manera convergente, Sassen (2001) ha señalado la coexistencia de territorios altamente integrados en redes transnacionales con otros progresivamente desconectados. Estas nuevas geografías sociales no reproducen simplemente dicotomías urbano-rurales, sino fracturas funcionales vinculadas a la inserción diferencial en la economía global.

En Costa Rica, desde 2014 —año de la primera de las cuatro derrotas consecutivas del PLN hasta la fecha— se hacen visibles signos de agotamiento del eje histórico del bloque dominante. De eso también forma parte la crisis del viejo bipartidismo, que tiene como otro referente la prolongada declinación del Partido Unidad Social Cristiana desde inicios del siglo XXI. Las dificultades para reconstruir las bases materiales de consenso en un contexto de desigual-

dad persistente, crisis fiscal y fragmentación de las clases medias sugieren la presencia de una crisis orgánica en sentido gramsciano (Gramsci, 1981). Los resultados de las elecciones de 2014 en adelante, y en particular el proceso electoral de 2022 y, posteriormente, el ascenso del PPSO en 2026, pueden interpretarse como momentos sucesivos de esa transición hegemónica incompleta. En este artículo no se propone una revisión de todo ese periodo, pero sí se reconoce la necesidad de una mirada a mediano plazo. Por el momento, intentamos interpretar los resultados más recientes.

Es en este marco que la categoría de fragilidad territorial adquiere centralidad analítica. A diferencia del enfoque centrado exclusivamente en el desarrollo humano, como el propuesto por Romero Zúñiga y Morales Gamboa (2026), la noción de fragilidad territorial va más allá y permite integrar dimensiones económicas, institucionales y político-hegemónicas.

La fragilidad no designa únicamente el rezago socioeconómico, sino también la convergencia estructural de desarticulación productiva, de una estatalidad diferenciada y de debilitamiento del consenso político (O'Donnell, 1993; Risse, 2011), así como la exposición a dinámicas de violencia que pueden reconfigurar la gobernanza local (Muggah, 2014, 2019). Desde el enfoque de la heterogeneidad estructural, Pérez Sáinz (2014) y Pérez Sáinz, ed. (2017) han mostrado cómo estas segmentaciones territoriales debilitan las bases materiales del pacto social.

Nuestra hipótesis, planteada arriba, sugiere que la diferencia porcentual de votos entre el PPSO y el PLN —definida como la diferencia entre el porcentaje obtenido por el PLN y el obtenido por el PPSO en cada cantón— aumenta sistemáticamente en aquellos territorios donde convergen niveles más altos de fragilidad territorial. Esta propuesta sostiene que la geografía electoral de 2026 constituye la manifestación territorializada empírica de una crisis hegemónica en curso. Específicamente, se formulan las siguientes hipótesis:

- **H1:** A menor Índice de Desarrollo Social (IDS) cantonal, mayor es la ventaja electoral del PPSO sobre el PLN.
- **H2:** A menor Índice de Competitividad Cantonal (ICC), mayor es la ventaja electoral del PPSO.

- **H3:** A mayor tasa de homicidios por 100.000 habitantes, mayor es la ventaja del PPSO.
- **H4:** La combinación de estas dimensiones explica de manera más robusta la variación territorial en la diferencia electoral que cada indicador considerado de forma aislada.

Estas hipótesis no buscan establecer causalidades deterministas, sino examinar si existe una asociación estructural entre la desigualdad territorial acumulada y la reconfiguración del comportamiento electoral. La variable dependiente —la diferencia porcentual de voto entre PPSO y PLN— se interpreta como un indicador empírico del desplazamiento territorial del eje político tradicional en las elecciones de 2026.

En los territorios donde la integración al proyecto desarrollista se debilitó con mayor intensidad, el consenso político se erosionó también y en mayor medida. Allí, la ventaja electoral del PPSO frente al PLN no constituye únicamente un dato coyuntural, sino la manifestación territorializada de una recomposición de las bases sociales y espaciales de la dominación política.

Para desarrollar este argumento, el artículo se organiza en varias secciones. En primer lugar, se presenta el marco conceptual de la fragilidad territorial y su articulación con la noción de crisis hegemónica. A continuación, se examina la reconfiguración histórica del bloque desarrollista costarricense y las transformaciones estructurales que han alterado sus bases materiales de consenso. Posteriormente, se presentan la estrategia metodológica y el análisis empírico de los indicadores cantonales de desarrollo social, competitividad económica y violencia, con el fin de evaluar su asociación con la diferencia porcentual de votos entre el PPSO y el PLN. Finalmente, se discuten los resultados a la luz del marco teórico propuesto y se plantean sus implicaciones para comprender la recomposición hegemónica en la Costa Rica contemporánea.

La fragilidad territorial como categoría analítica para el estudio de la reconfiguración hegemónica

La categoría de fragilidad territorial ha sido empleada en distintos campos analíticos —desde los estudios sobre migración hasta los análisis de violencia

urbana y de gobernanza subnacional— para describir contextos caracterizados por vulnerabilidad estructural, debilidad institucional y una capacidad limitada de reproducción socioeconómica. Sin embargo, su potencial heurístico trasciende estos ámbitos sectoriales y permite articular una interpretación más amplia de los procesos de transformación del orden político y de reconfiguración hegemónica en contextos de desarrollo desigual.

En trabajos previos, la fragilidad territorial fue conceptualizada como una condición estructural acumulativa, producto de procesos históricos de desarticulación productiva, precarización laboral, debilitamiento institucional y erosión de las capacidades comunitarias (Morales Gamboa, 2020). En esa formulación, la fragilidad no se reducía a la pobreza o a la carencia de recursos, sino que remitía a una capacidad territorial limitada para sostener condiciones estables de reproducción social, lo que generaba dinámicas de expulsión migratoria y círculos de deterioro autorreforzados (Morales Gamboa, 2020). Esta perspectiva dialoga estrechamente con el enfoque de la heterogeneidad estructural desarrollado por Pérez Sáinz (2014) y Pérez Sáinz, ed. (2017), quien ha subrayado cómo la modernización centroamericana ha producido una segmentación persistente del mercado laboral y una inserción subordinada en la economía global, territorialmente diferenciada y socialmente excluyente.

Para comprender los procesos políticos recientes —y en particular los patrones territoriales del comportamiento electoral— resulta necesario ampliar esta conceptualización e integrarla en un marco que articule economía política, espacialidad y hegemonía. Desde la teoría gramsciana, la hegemonía implica la capacidad de un bloque histórico para ejercer una dirección moral e intelectual, articulando consenso y coerción sobre bases materiales que aseguren la reproducción del orden social (Gramsci, 1981). Cuando esa articulación se debilita, se configura una crisis orgánica: un momento en el que las formas tradicionales de dirección pierden su eficacia integradora, mientras emergen nuevas fuerzas aún incapaces de consolidar una hegemonía alternativa (Gramsci, 1981).

La fragilidad territorial, en consecuencia, puede entenderse como la manifestación espacial de una crisis hegemónica, es decir, como el punto en el que las fracturas del desarrollo geográfico desigual se traducen en una recomposición política. No designa simplemente territorios pobres o rezagados, sino espacios

en los que la integración al proyecto histórico dominante se vuelve incompleta, erosionada o subordinada. Se trata de territorios donde convergen una estructura productiva precaria, una presencia estatal intermitente y una debilitada identificación política de la población con el orden existente. En tales contextos, la crisis del bloque histórico se territorializa: el debilitamiento del consenso se manifiesta en patrones diferenciados de comportamiento político y en la emergencia de opciones que interpelan, cuestionan y desafían el orden establecido.

Como se indicó anteriormente, la literatura sobre desarrollo geográfico desigual fundamentada en la relación entre acumulación capitalista y jerarquías territoriales (Harvey 2003), los procesos de reescalamiento de capacidades desiguales (Brenner 2004) y los territorios relegados (Rodríguez-Pose 2018) y expulsados (Sassen, 2001), aporta herramientas fundamentales para esta ampliación conceptual. Desde esta perspectiva, la fragilidad territorial puede entenderse como el resultado de inserciones subordinadas o desconectadas de los circuitos dinámicos de acumulación, más que como un simple aislamiento geográfico.

La dimensión institucional de la fragilidad puede profundizarse a partir de los aportes de la estatalidad diferenciada. O'Donnell (1993) introdujo la noción de “zonas marrones” para describir espacios en los que el Estado de derecho opera de manera incompleta o fragmentaria. Migdal (2001) subrayó la coexistencia de múltiples centros de poder en territorios donde el Estado no ejerce plenamente el monopolio de la regulación social. Risse (2011), desde el enfoque de “*limited statehood*”, ha planteado que la gobernanza puede configurarse en arreglos híbridos en los que actores no estatales asumen funciones regulatorias. Estos aportes permiten comprender la fragilidad territorial como una condición de estatalidad desigual, que no implica la ausencia absoluta del Estado, sino la presencia intermitente y capacidades diferenciadas.

En este punto resulta especialmente relevante la contribución de Muggah (2014, 2019), quien sostiene que la fragilidad no es un atributo exclusivamente nacional, sino un fenómeno subnacional y microterritorial. Para este autor, la fragilidad combina vulnerabilidad socioeconómica, déficit institucional y exposición a riesgos de violencia, lo que configura espacios en los que la gobernanza formal coexiste con arreglos informales o paralelos. La fragilidad, en este sentido, no solo describe un estado de carencia, sino también un umbral

crítico en el que se reconfiguran las formas de regulación social y política. Este enfoque permite vincular la precariedad estructural con la posible emergencia de mediaciones políticas alternativas o de poderes fácticos territorializados.

A partir de estos enfoques, es posible reinterpretar la fragilidad territorial como una categoría relacional que articula diversas dimensiones interdependientes. En primer lugar, una dimensión económica-productiva vinculada a la heterogeneidad estructural y a la inserción desigual en la economía global (Pérez Sáinz, 2014; Harvey, 2003). En segundo término, una dimensión institucional asociada a la densidad y a la efectividad diferenciadas de la presencia estatal en el territorio (O'Donnell, 1993; Risse, 2011). Finalmente, una dimensión político-hegemónica relacionada con la capacidad del bloque histórico dominante para reproducir consensos a escala territorial (Gramsci, 1981).

Cuando estas dimensiones convergen en condiciones de debilitamiento, el territorio se convierte en un espacio de vulnerabilidad estructural y, simultáneamente, en un escenario potencial de conflictos y violencia, así como de posibles rupturas y configuraciones políticas. Esta conceptualización permite integrar enfoques provenientes de la economía política territorial, de los estudios sobre la estatalidad diferenciada y de la teoría de la hegemonía.

Así entendida, la fragilidad territorial constituye una herramienta analítica clave para examinar las transformaciones del bloque histórico costarricense y del sistema sociopolítico. Permite desplazar la mirada desde explicaciones culturalistas o meramente coyunturales del comportamiento electoral hacia una interpretación estructural y espacialmente situada de la crisis hegemónica. Los territorios donde la reproducción socioeconómica es precaria, la institucionalidad es débil y el consenso histórico se erosiona no son únicamente espacios de rezago, sino escenarios donde se expresan —y eventualmente se gestan— nuevas articulaciones políticas.

Crisis hegemónica y reconfiguración territorial del bloque histórico costarricense

El bloque histórico desarrollista y su fundamento territorial

El orden político costarricense de la segunda mitad del siglo XX puede interpretarse como la consolidación de un bloque histórico en sentido gramsciano: una articulación relativamente coherente entre la estructura económica, las instituciones estatales y las formas de dirección cultural y moral. Este bloque se configuró en torno a un proyecto desarrollista-reformista, bajo las banderas de la socialdemocracia, con alternancia en el ejercicio del poder, que combinó la expansión del Estado social, el fortalecimiento institucional, la movilidad ascendente a través de la educación pública y la ampliación de las clases medias.

Más allá de su expresión partidaria —donde el Partido Liberación Nacional (PLN) y la alternancia bipartidista desempeñaron un papel central como articuladores políticos— la hegemonía de este bloque descansó en su capacidad de integrar territorialmente el país. La expansión de los servicios públicos, la infraestructura, el crédito agrícola y el empleo estatal permitió que amplias regiones rurales y urbanas se incorporaran progresivamente al proyecto nacional. La promesa de movilidad social no fue meramente discursiva; tuvo bases materiales concretas.

En términos gramscianos, el bloque histórico costarricense logró una combinación relativamente estable entre la coerción institucional y el consenso social. Las clases medias emergentes, el campesinado modernizado, los sectores empresariales nacionales y una burocracia estatal en expansión compartieron, con tensiones, pero sin ruptura estructural, una narrativa común de progreso, estabilidad democrática y excepcionalidad regional. La hegemonía, por tanto, no se limitaba al control del aparato estatal, sino que implicaba la dirección moral e intelectual del conjunto de la sociedad. Esos sectores medios siempre fueron el espacio de disputa por la hegemonía entre diversas corrientes, desde la izquierda hasta el conservadurismo.

Sin embargo, toda hegemonía es históricamente situada. La consolidación de este bloque estuvo vinculada a un régimen de acumulación nacional-desarrollista y al contexto internacional de la Guerra Fría. Esto último implicó un

alineamiento de las élites políticas locales con la hegemonía estadounidense tanto ideológica como militar. Pero a escala local, su estabilidad dependía de la capacidad del Estado para mediar en conflictos distributivos y sostener procesos de integración territorial progresiva.

Reestructuración económica y crisis orgánica

Las transformaciones asociadas a la globalización, la apertura comercial, la financiarización y la reestructuración productiva alteraron progresivamente las bases materiales de ese bloque. El nuevo patrón de acumulación se orientó hacia sectores altamente integrados a las cadenas globales de valor —zonas francas, servicios empresariales, exportaciones especializadas—, lo que redujo la centralidad del mercado interno y debilitó la articulación tradicional entre el capital nacional y el Estado social. En vez de clústeres que favorecieran la interconexión productiva, la distribución de la riqueza y la potenciación de la competitividad regional, el nuevo patrón de acumulación favoreció la formación de enclaves territoriales con escasa o nula integración con las economías locales, que funcionaron como “islas” frente a los mercados locales, pero interconectadas con los procesos de acumulación globales. Esta dinámica produce una integración funcional selectiva más que una integración territorial inclusiva.

Ese proceso produjo una creciente diferenciación entre territorios dinámicamente conectados a la economía global y otros rezagados o subordinados. Mientras algunos espacios urbanos y enclaves productivos se beneficiaron de inversiones y empleo calificado, otras regiones enfrentaron estancamiento, informalidad y dependencia de transferencias públicas. La integración territorial dejó de ser progresiva y se volvió selectiva y, por tanto, excluyente.

En términos teóricos, esta transformación puede entenderse como el inicio de la crisis orgánica. Siguiendo a Gramsci, una crisis orgánica no es simplemente una crisis gubernamental o electoral, sino una ruptura más profunda en la capacidad de las clases dominantes para mantener la dirección moral e intelectual. Cuando las condiciones materiales que sustentan el consenso se erosionan, la legitimidad del orden existente comienza a resquebrajarse.

En Costa Rica, la fragmentación territorial y la creciente desigualdad han debilitado la promesa integradora que sustentaba la hegemonía desarrollista. Las

clases medias, antes eje estabilizador del sistema, experimentan procesos de diferenciación interna, precarización y endeudamiento. Su capacidad para actuar como amortiguador político se reduce. Al mismo tiempo, sectores populares en territorios periféricos perciben una presencia estatal más débil o insuficiente, lo que erosiona su identificación con las mediaciones institucionales tradicionales. La crisis de la hegemonía se manifiesta en los conflictos y tensiones entre segmentos de los grupos medios, así como entre estos y otros grupos excluidos.

La crisis del sistema tradicional de partidos y del PLN como alianza hegemónica debe situarse en ese contexto estructural. Más que un declive meramente partidario, se trata de la pérdida de la capacidad de articular intereses diversos en torno a una narrativa nacional integradora. El bloque histórico que sostuvo su hegemonía ya no cuenta con las mismas bases económicas ni con la misma cohesión social.

Nuevas geografías sociales y territorialización del descontento

En línea con la literatura contemporánea sobre las nuevas geografías sociales, la crisis del bloque histórico costarricense no puede comprenderse sin atender a su dimensión espacial (Sassen, 2001; Harvey, 2003; Brenner, 2004). En esta perspectiva, el conflicto político contemporáneo no se organiza exclusivamente en torno a dicotomías clásicas como urbano/rural o centro/periferia, sino en torno a la inserción desigual en las redes globales de producción, financiamiento y circulación. Surgen “archipiélagos” de prosperidad altamente conectados y, simultáneamente, periferias internas caracterizadas por una precariedad estructural. Así como los archipiélagos no mantienen una relación de contigüidad espacial entre sí, las periferias forman manchas desconectadas de fragilidad acumulada.

La noción de “geografía del descontento” (Rodríguez-Pose, 2018) resulta particularmente pertinente en este caso. Los territorios que perciben haber quedado al margen de los beneficios de la globalización tienden a expresar su malestar mediante opciones políticas que desafían a las élites tradicionales. Este fenómeno no responde exclusivamente a variables culturales, ni a comportamientos solo individuales, sino a experiencias territoriales concretas de exclusión o estancamiento.

Aplicado al caso costarricense, el patrón territorial del voto en 2026 sugiere

que los territorios con mayores niveles de desigualdad y precariedad no solo enfrentan carencias materiales, sino también una ruptura simbólica con el proyecto histórico de integración nacional. La promesa de movilidad se percibe agotada y, donde eso se sitúa, la hegemonía integradora pierde eficacia.

Este enfoque permite cuestionar las viejas dicotomías espaciales. La desigualdad contemporánea atraviesa tanto las zonas rurales como las periferias urbanas densamente pobladas. Del mismo modo, existen enclaves rurales y periféricos altamente integrados a mercados globales. La fractura principal no es meramente geográfica en sentido físico, sino funcional: integración versus desconexión en relación con el régimen de acumulación dominante.

Hacia una recomposición hegemónica fragmentada

El debilitamiento del pacto desarrollista y de sus alianzas políticas no implica necesariamente la ausencia de dominación, sino su transformación. La emergencia de nuevas alianzas entre sectores empresariales transnacionalizados y liderazgos políticos que apelan directamente a territorios excluidos puede interpretarse como un intento de recomposición del régimen de dominación desde las escalas locales.

A diferencia de la hegemonía integradora del periodo anterior, esta nueva configuración tendería a ser más selectiva y territorialmente segmentada. En lugar de articular un amplio consenso redistributivo, podría apoyarse en una combinación de gubernamentalidad ejecutiva, legitimidad plebiscitaria y crecimiento concentrado en sectores estratégicos. La mediación clásica de las clases medias organizadas perdería su centralidad. En su lugar, aparecen dispositivos orientados a la distribución selectiva de compensaciones o castigos para promover el realineamiento de las bases sociales.

En este escenario, la crisis actual no representa simplemente una transición entre partidos, sino una transformación de esas bases sociales y espaciales de la hegemonía. El orden anterior, sustentado en la integración territorial progresiva y en la centralidad del Estado social, muestra signos de agotamiento. Lo que emerge aún no constituye un bloque histórico plenamente consolidado, pero sí evidencia un proceso de rearticulación en el que las nuevas geografías sociales desempeñan un papel decisivo.

Hegemonía, territorialidad y gobernanza criminal: un marco integrado de análisis

Hegemonía y territorialización del poder

La noción de hegemonía, como se señaló anteriormente, se entiende como la capacidad de un grupo social para dotar al conjunto de la sociedad de una dirección moral e intelectual, articulando coerción y consenso en una forma relativamente estable de dominación (Gramsci, 1981). La hegemonía no es exclusivamente discursiva; posee una dimensión material que se manifiesta en instituciones, prácticas sociales y configuraciones espaciales concretas. En este sentido, todo bloque histórico supone una articulación entre la estructura económica, las formas estatales y la organización territorial del poder.

Retomando a Poulantzas (1978), el Estado se expresa como la materialización de las relaciones de fuerza entre clases y fracciones de clase. Esa condensación no es abstracta: se territorializa mediante infraestructura, burocracias, sistemas de justicia, políticas sociales y dispositivos de seguridad. La hegemonía, por tanto, se sustenta en una organización espacial que permite la reproducción del consenso.

Cuando esa territorialización se fragmenta —esto es, cuando la presencia estatal se vuelve desigual o selectiva— la hegemonía también se resquebraja. Gramsci (1981) denomina crisis orgánica a los momentos en que se debilitan simultáneamente la dirección política y la base material que sostenía el consenso. La pérdida de capacidad integradora del Estado en la dimensión territorial puede leerse como un síntoma de dicha crisis.

Nuevas geografías sociales, gobernanza criminal y órdenes híbridos

Mientras que algunos territorios se anclan a circuitos globales de acumulación, otros experimentan procesos de expulsión económica y de debilitamiento institucional. Adicionalmente, O'Donnell (1993) introdujo la noción de “zonas marrones” para describir territorios en los que la legalidad estatal es incompleta y la ciudadanía se ejerce de manera desigual. En estos espacios, el monopolio legítimo de la coerción —fundamento del Estado moderno—

puede mantenerse formalmente, pero su ejercicio efectivo es intermitente o limitado. La estatalidad se vuelve fragmentada. Se puede implantar en el territorio una gubernamentalidad ejecutiva, funcional para los negocios, pero que destierra sujetos, recursos naturales y derechos.

La desigualdad territorial, por tanto, no es únicamente económica: implica diferencias en la densidad institucional, el acceso a los derechos y la capacidad regulatoria. La hegemonía estatal, en consecuencia, adquiere un carácter territorialmente desigual.

En contextos de estatalidad limitada o fragmentada, la literatura sobre gobernanza criminal ha documentado la emergencia de actores ilegales que ejercen funciones regulatorias en territorios específicos, configurando lo que algunos autores han descrito como una *pax criminalis*: un orden local sustentado en la imposición de reglas, la resolución informal de conflictos y la provisión selectiva de protección por parte de organizaciones ilícitas (Koonings, 2004; Arias, 2017). Este tipo de arreglo no implica necesariamente la ausencia total del Estado, sino la coexistencia, la negociación o la superposición entre autoridades formales e informales. En lugar de anomia, se produce un modelo híbrido de gobernanza en el que el Estado de Derecho convive con estructuras paralelas de regulación territorial.

Como muestran Lessing (2021) y Trejo y Ley (2020), estos órdenes pueden combinar coerción, control social y mediaciones políticas estratégicas, lo que da lugar a configuraciones de soberanía fragmentada.

En este marco, la tasa de homicidios utilizada en el modelo empírico no debe interpretarse únicamente como indicador de criminalidad, sino como una proxy imperfecta de la estatalidad diferenciada: niveles elevados de violencia letal pueden reflejar territorios en los que el monopolio efectivo de la coerción estatal se encuentra erosionado o disputado, lo que crea condiciones propicias para arreglos híbridos de autoridad. Sin asegurar la existencia generalizada de un control criminal territorial en la sociedad costarricense, la variable de homicidios permite aproximar empíricamente la dimensión institucional de la fragilidad territorial y su posible incidencia en la reconfiguración de las lealtades políticas locales.

Yashar (2018) señala que la expansión de las economías ilícitas en contextos de debilidad institucional produce “ecologías homicidas” en las que la violencia y la gobernanza criminal se entrelazan con las dinámicas políticas locales. Estos arreglos no implican necesariamente la ausencia total del Estado, sino la coexistencia de múltiples centros de autoridad. Algunos autores describen estas configuraciones como órdenes híbridos, en las que actores estatales y no estatales comparten o disputan la regulación territorial (Arias, 2017).

La influencia de estas estructuras en los procesos electorales ha sido documentada en diversos contextos latinoamericanos. Trejo y Ley (2020) demuestran cómo la competencia electoral puede interactuar con redes criminales, lo que puede generar violencia estratégica o pactos informales. Snyder y Durán-Martínez (2009) sostienen que la relación entre el Estado y el crimen organizado puede oscilar entre la confrontación y la colusión, dependiendo de los incentivos políticos y de los arreglos institucionales.

En tales escenarios, los actores ilegales pueden incidir en las dinámicas electorales mediante el financiamiento ilícito, el apoyo selectivo a candidatos, la intimidación o la captura de gobiernos locales. No obstante, la evidencia comparada indica que estas influencias varían considerablemente en función de la fortaleza institucional y de la configuración territorial del poder. En este estudio no fue posible profundizar en esta dimensión en Costa Rica, pero puede abordarse en futuras investigaciones.

Crisis hegemónica y fragmentación territorial del consenso

La integración de hegemonía, territorialidad y gobernanza criminal permite sostener que la crisis de un bloque histórico puede manifestarse como una fragmentación territorial del consenso. Cuando el régimen de acumulación dominante produce profundas desigualdades espaciales, la capacidad integradora del Estado se erosiona de manera diferenciada.

En territorios integrados a circuitos dinámicos de acumulación, la hegemonía puede conservar ciertos grados de densidad institucional y de legitimidad. En territorios expulsados o precarizados, en cambio, la combinación de desigualdad económica y estatalidad limitada crea condiciones propicias para la emergencia de poderes fácticos alternativos. La gobernanza criminal, en este

sentido, puede interpretarse como un indicador de vacíos hegemónicos más que como una anomalía aislada.

Este marco analítico no presupone determinismo criminal ni una captura generalizada del Estado. Más bien, propone examinar empíricamente la relación entre la desigualdad territorial, el debilitamiento institucional y la reconfiguración de las alianzas políticas. La crisis hegemónica se expresa no solo en la volatilidad electoral y la fragmentación partidaria, sino también en transformaciones concretas de la autoridad territorial.

Desde esta perspectiva, el análisis de procesos políticos contemporáneos requiere mapear la densidad estatal, la inserción económica territorial y las redes formales e informales de poder. La territorialización de la desigualdad puede traducirse en la emergencia de nuevas formas de dominación y de mediación política. La inclusión de la tasa de homicidios como variable explicativa en el modelo empírico, pese a sus limitaciones, responde precisamente a esta dimensión de la estatalidad fragmentada.

La discusión teórica previa ha planteado que la crisis del bloque histórico costarricense puede manifestarse territorialmente a través de configuraciones diferenciadas de fragilidad estructural. Si la hegemonía supone una articulación material y simbólica capaz de reproducir consenso (Gramsci, 1981), su debilitamiento debería manifestarse con mayor intensidad en aquellos territorios donde la integración socioeconómica, la densidad institucional y la legitimidad política se han erosionado. En este sentido, la categoría de fragilidad territorial no constituye únicamente una herramienta descriptiva, sino también una hipótesis estructural susceptible de contrastación empírica. El paso hacia el análisis cuantitativo no implica reducir la crisis hegemónica a una correlación estadística, sino operacionalizar sus manifestaciones territoriales observables.

A continuación, se presenta la estrategia metodológica mediante la cual se examina si la diferencia porcentual de votos entre el PPSO y el PLN se asocia sistemáticamente con indicadores cantonales de desarrollo social, competitividad económica y violencia, como dimensiones empíricas de la fragilidad territorial.

Si bien la literatura sobre comportamiento electoral subraya la importancia de estudiar la dimensión de la subjetividad política mediante variables culturales

y actitudinales —como la confianza institucional, la orientación ideológica o las percepciones de corrupción (Norris, 2011; Inglehart & Norris, 2016)—, el presente estudio opta deliberadamente por no incorporarlas en esta etapa del análisis. Esta decisión responde a dos consideraciones metodológicas. En primer lugar, el objetivo central no es explicar el comportamiento individual del votante, sino examinar la asociación entre configuraciones territoriales estructurales y desplazamientos agregados en el mapa electoral. En segundo lugar, la incorporación de variables de opinión pública a escala cantonal implicaría enfrentar el problema clásico de la inferencia ecológica: la imposibilidad de inferir comportamientos individuales a partir de datos agregados sin incurrir en sesgos potenciales (King, 1997). Dado que las encuestas de opinión se recogen a nivel individual y no siempre permiten una agregación robusta y representativa a escala cantonal, el presente análisis se centra en dimensiones estructurales observables a nivel territorial. La integración de los niveles micro y macro puede constituir una agenda de investigación futura.

Metodología

Diseño de investigación y unidad de análisis

El presente estudio adopta un diseño cuantitativo de corte transversal, orientado a examinar la relación entre la fragilidad territorial y el comportamiento electoral en las elecciones nacionales de 2026. La unidad de análisis es el cantón, lo cual resulta metodológicamente pertinente dado que la hipótesis central plantea que la crisis hegemónica se manifiesta territorialmente de manera diferenciada. Costa Rica cuenta con 84 cantones, que constituyen la base territorial para el análisis empírico. Tres de ellos son de reciente creación. Debido a la disponibilidad de datos comparables para las variables independientes, el análisis empírico se realiza en 81 cantones, excluyendo los tres cantones creados recientemente (Puerto Jiménez, Monteverde y Río Cuarto), para los cuales, al momento del análisis, no existían datos desagregados de todas las variables.

El enfoque cantonal permite capturar variaciones subnacionales en el desarrollo social, la competitividad económica y la violencia, evitando la agregación

provincial, que podría ocultar heterogeneidades internas significativas. Asimismo, la escala cantonal es consistente con la literatura sobre la estatalidad diferenciada y la gobernanza territorial (O'Donnell, 1993; Risse, 2011), que enfatiza la importancia de las dinámicas subnacionales en la configuración del poder político.

Variable dependiente

La variable dependiente es la diferencia porcentual de votos entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN) en cada cantón durante las elecciones presidenciales de 2026 (Figura 1). Esta variable se operacionaliza de la siguiente manera:

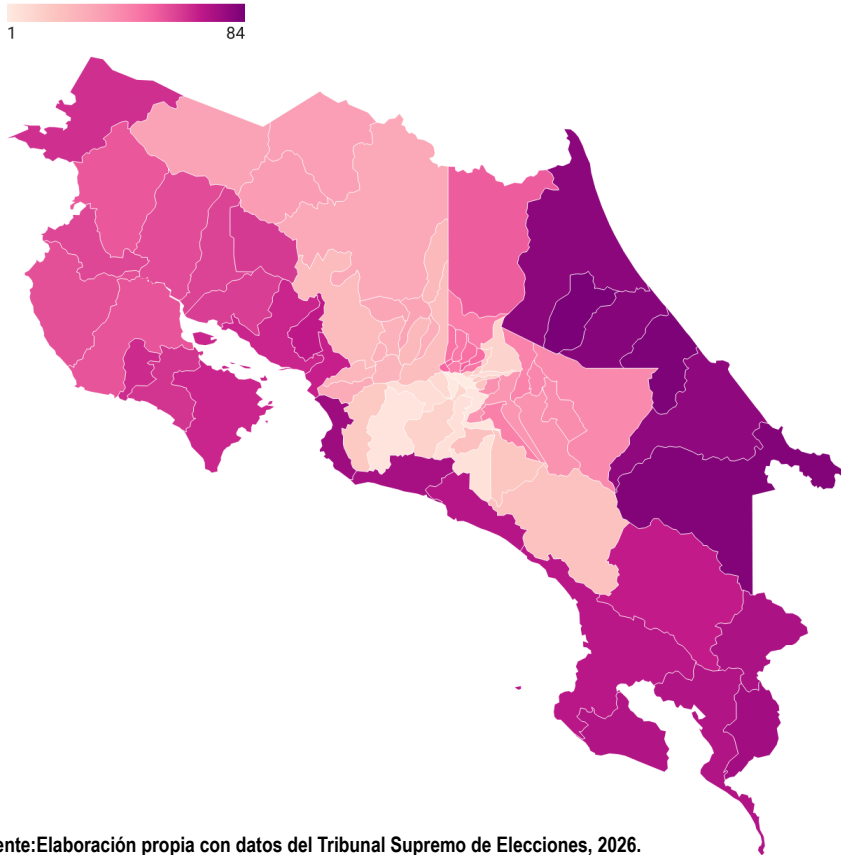
$$\Delta \text{Voto}_i = \% \text{PPSO}_i - \% \text{PLN}_i$$

donde i representa cada cantón.

La elección de esta variable responde a la necesidad de captar el desplazamiento territorial del eje político tradicional. Más que analizar el porcentaje absoluto de voto del PPSO, la diferencia respecto al PLN permite estimar la magnitud relativa del desplazamiento del partido históricamente articulador del bloque desarrollista. De este modo, la variable dependiente actúa como indicador empírico de la reconfiguración territorial del consenso político. Valores positivos indican una ventaja del PPSO; valores negativos, una ventaja del PLN.

Figura 1. Brecha de votos entre PPSO y PLN

Brecha a escala cantonal en el porcentaje de votos en las elecciones de 2026



Fuente:Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo de Elecciones, 2026.

Variables independientes

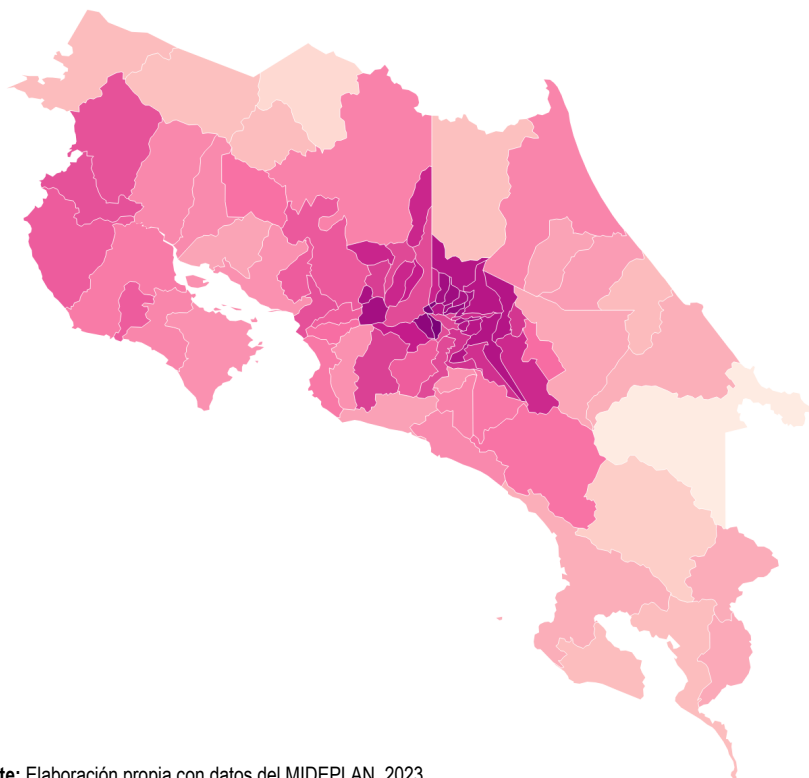
Con el fin de operacionalizar la categoría de fragilidad territorial, se seleccionaron tres dimensiones observables que capturan aspectos económicos, sociales e institucionales del territorio:

Índice de Desarrollo Social (IDS) 2023

El IDS elaborado por el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) sintetiza información sobre las condiciones de bienestar en dimensiones como la educación, la salud, la participación y la seguridad social. Se utiliza como proxy de la integración socioeconómica territorial. Se espera una relación negativa entre el IDS y la diferencia electoral (H1): a menor nivel de desarrollo social, mayor será la ventaja del PPSO sobre el PLN.

Figura 2. Índice de Desarrollo Social en 2023

Datos cantonales del IDS para 2023



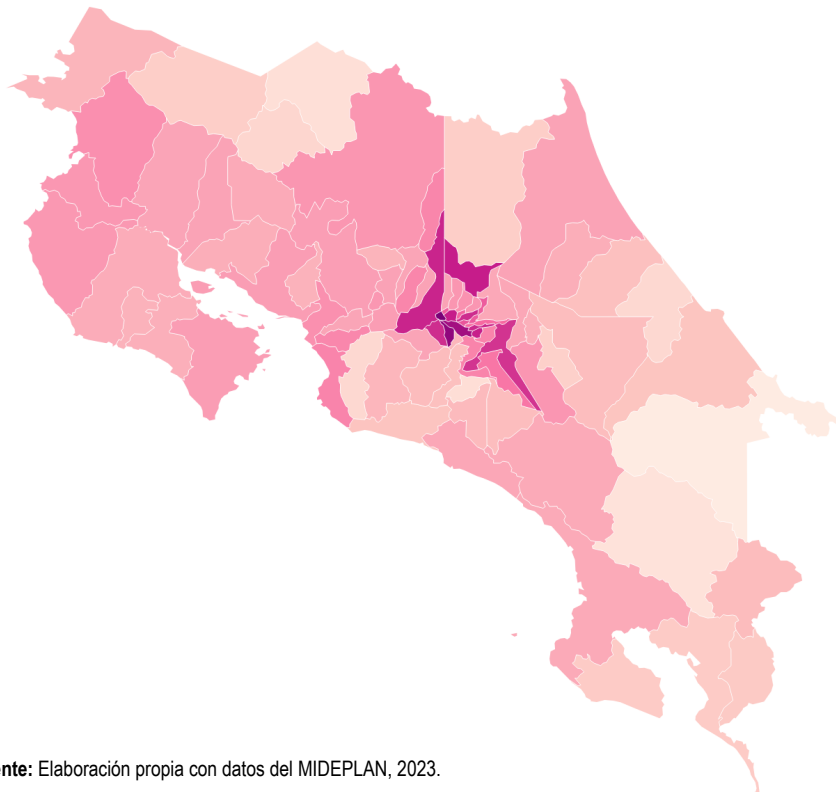
Fuente: Elaboración propia con datos del MIDEPLAN, 2023

Índice de Competitividad Cantonal (ICC) 2023

El ICC, elaborado por la Escuela de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), mide las capacidades productivas, el entorno económico e institucional y el desempeño competitivo de cada cantón. Este indicador permite medir la inserción territorial en el régimen de acumulación dominante. Se espera una relación negativa entre el ICC y la diferencia electoral **3.3** (H2): a menor competitividad, mayor será la ventaja del PPSO.

Figura 3. Índice de Competitividad Cantonal en 2023

Distribución del ICC cantonal en 2023



Fuente: Elaboración propia con datos del MIDEPLAN, 2023.

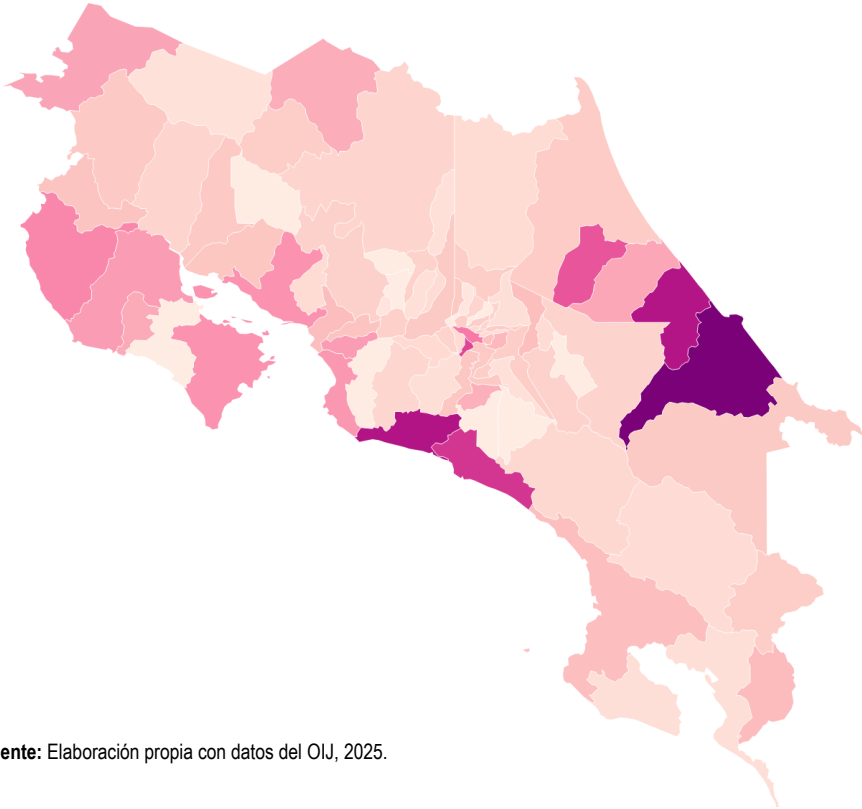
Tasa de homicidios por 100.000 habitantes

La tasa de homicidios, elaborada a partir de las estadísticas oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y de los datos de población cantonal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), se incorpora como indicador de exposición territorial a las dinámicas de violencia letal y a la posible fragmentación de la autoridad estatal. Siguiendo la literatura sobre estatalidad diferenciada (O'Donnell, 1993; Risse, 2011) y gobernanza criminal (Arias, 2017; Lessing, 2021), niveles elevados de violencia pueden reflejar territorios en los que el monopolio efectivo de la coerción estatal se encuentra erosionado o disputado. En estos contextos pueden emerger arreglos híbridos de autoridad —descritos en la literatura como *pax criminalis* (Koonings, 2004)— en los que actores informales ejercen funciones regulatorias paralelas o superpuestas a las del Estado de Derecho.

No se asume que la tasa de homicidios capture directamente la existencia de control criminal territorial, sino que actúa como un proxy imperfecto de la estatalidad diferenciada y de la vulnerabilidad institucional. Se espera una relación positiva entre la tasa de homicidios y la diferencia electoral (H3), bajo la hipótesis de que los territorios con mayor fragilidad institucional pueden experimentar mayores desplazamientos en sus alineamientos políticos.

Figura 4. Tasa de homicidios en 2025

-Según cantón con datos de 2025-



Fuente: Elaboración propia con datos del OIJ, 2025.

Estrategia analítica

El análisis se desarrolló en tres etapas:

Análisis descriptivo

Se exploraron las distribuciones de las variables y los patrones espaciales preliminares para identificar tendencias agregadas y posibles valores atípicos.

Regresiones lineales simples

Se estimaron modelos de regresión lineal ordinaria (OLS) independientes para cada variable explicativa:

$$\Delta\text{Voto}_i = \beta_0 + \beta_1 X_i + \varepsilon_i$$

donde X_i corresponde alternativamente a IDS, ICC y tasa de homicidios.

Esta etapa permite evaluar la asociación bivariada entre cada dimensión de fragilidad y la diferencia electoral.

Modelo múltiple

Posteriormente, se estimó un modelo de regresión múltiple que incorpora simultáneamente las tres dimensiones:

$$\Delta\text{Voto}_i = \beta_0 + \beta_1 \text{IDS}_i + \beta_2 \text{ICC}_i + \beta_3 \text{Homicidios}_i + \varepsilon_i$$

Este modelo permite evaluar el efecto independiente de cada variable controlando por las demás, así como la robustez de las asociaciones observadas. La hipótesis H4 sostiene que la combinación de dimensiones ofrece una mayor capacidad explicativa que la de cada variable considerada de forma aislada.

Se reportan coeficientes estimados, errores estándar, valores de p (p-value) y coeficientes de determinación (R^2 ajustado). Asimismo, se evaluaron posibles problemas de multicolinealidad mediante el cálculo de los factores de inflación de la varianza (VIF), dado que IDS e ICC podrían estar correlacionados estructuralmente. Se verificó que los supuestos básicos del modelo OLS no estaban gravemente vulnerados.

Justificación del enfoque

La utilización de modelos OLS se justifica por la naturaleza continua de la variable dependiente y por el objetivo exploratorio-explicativo del estudio. Si bien el diseño transversal no permite establecer relaciones causales estrictas, sí permite identificar patrones estructurales de asociación consistentes con la hipótesis de territorialización de la crisis hegemónica.

Este enfoque cuantitativo se complementa con el marco teórico desarrollado en las secciones previas, evitando una interpretación puramente econométrica de los resultados. Los coeficientes estimados se interpretan como indicadores empíricos de configuraciones territoriales de poder, no como determinantes únicos del comportamiento electoral.

Limitaciones

El estudio presenta varias limitaciones:

1. Se trata de un análisis transversal correspondiente a un único proceso electoral.
2. No incorpora variables culturales ni actitudinales.
3. No captura dinámicas intracantonales.
4. La violencia, medida por los homicidios, no agota la dimensión de la gobernanza criminal.
5. No se realizó un análisis espacial formal (por ejemplo, de autocorrelación espacial), lo cual puede formar parte de una agenda futura.

No obstante, el objetivo no es ofrecer una explicación exhaustiva del comportamiento electoral, sino evaluar si existe evidencia empírica consistente con la hipótesis de que la fragilidad territorial se asocia con la reconfiguración del mapa electoral.

Resultados empíricos

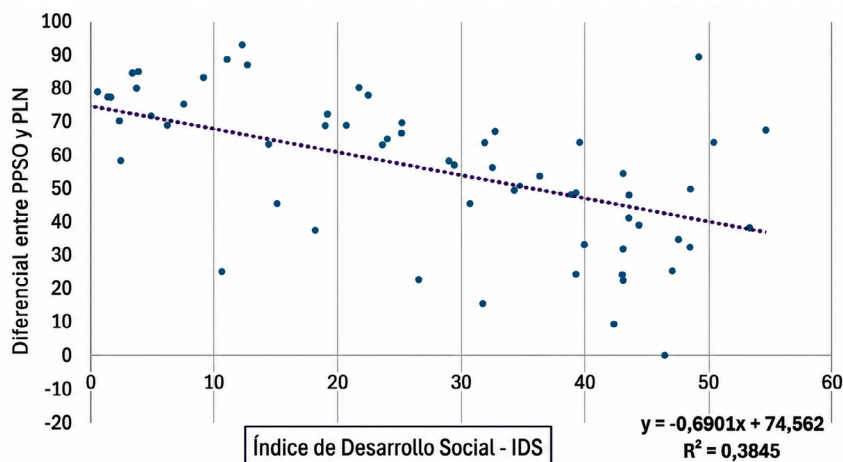
Análisis bivariado: fragilidad territorial y diferencia electoral

El análisis de regresión lineal simple muestra asociaciones consistentes entre las dimensiones seleccionadas de fragilidad territorial y la diferencia porcentual en votos entre el Partido Pueblo Soberano (PPSO) y el Partido Liberación Nacional (PLN).

El Índice de Desarrollo Social (IDS) presenta una correlación negativa relativamente fuerte con la diferencia electoral ($r \approx -0.60$), lo que indica que los cantones con menor desarrollo social tienden a registrar mayores ventajas electorales del PPSO (Gráfico 1).

El Índice de Competitividad Cantonal (ICC) también muestra una relación negativa ($r \approx -0.42$), aunque de menor magnitud, mientras que la tasa de homicidios por 100.000 habitantes presenta una asociación positiva moderada ($r \approx 0.41$). En conjunto, estos resultados sugieren que la reconfiguración electoral se asocia sistemáticamente con configuraciones territoriales de menor integración socioeconómica, menor dinamismo productivo y mayores niveles de violencia letal.

Figura 5. Correlación entre el IDS 2023 y la diferencia electoral entre PPSO y PLN en 2026



Nota: La línea de tendencia representa la relación bivariada entre IDS y el diferencial electoral. El modelo de regresión múltiple que incorpora la competitividad cantonal y la tasa de homicidios alcanza un R^2 de 0.426.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Tribunal Supremo de Elecciones y del MIDEPLAN, 2026.

Modelo múltiple: efectos independientes y robustez

La estimación del modelo de regresión múltiple, que incorpora simultáneamente IDS, ICC y la tasa de homicidios, permite evaluar la robustez de estas asociaciones y distinguir efectos independientes.

Los resultados indican que el IDS mantiene un coeficiente negativo y estadísticamente significativo aun controlando por competitividad y violencia. Esto sugiere que el desarrollo social territorial ejerce un efecto estructural propio sobre la diferencia electoral. De manera similar, la tasa de homicidios mantiene un coeficiente positivo y significativo, lo que indica que la dimensión de la violencia no se reduce a un mero reflejo del rezago socioeconómico.

Específicamente, el modelo de regresión múltiple confirma la relevancia estructural del desarrollo social territorial (Cuadro 1). El coeficiente del Índice de Desarrollo Social (IDS) permanece negativo y altamente significativo ($\beta \approx -0.53$; $p < 0.001$), lo que indica que, aun controlando por la competitividad económica y la violencia, los cantones con menor desarrollo social registran mayores ventajas electorales del PPSO. La tasa de homicidios también presenta un coeficiente positivo y estadísticamente significativo ($\beta \approx 0.29$; $p \approx 0.028$), lo que sugiere que los contextos territoriales con niveles más altos de violencia letal se asocian con desplazamientos electorales adicionales.

En contraste, el Índice de Competitividad Cantonal (ICC) pierde significancia estadística al introducirse simultáneamente con el IDS, lo cual es consistente con la correlación estructural existente entre ambas dimensiones. Este resultado sugiere que parte del efecto de la competitividad territorial está mediado por el nivel de desarrollo social.

El análisis de multicolinealidad mediante factores de inflación de la varianza (VIF) no muestra niveles críticos que invaliden la estimación, lo que permite sostener que las asociaciones observadas no se deben a una redundancia extrema entre las variables explicativas.

El modelo explica aproximadamente el 40 % de la variación cantonal en la diferencia electoral (R^2 ajustado ≈ 0.40), lo que indica una capacidad explicativa considerable para un análisis territorial basado en un número reducido de variables estructurales.

En términos sustantivos, el modelo múltiple confirma la hipótesis H4: la combinación de dimensiones económicas, sociales e institucionales ofrece una explicación más robusta del patrón territorial de la diferencia electoral que cualquier variable considerada de forma aislada.

Cuadro 1. Determinantes territoriales del diferencial electoral entre PPSO y PLN.

Variable dependiente:

Diferencia porcentual de votos (PPSO – PLN)

Variables	Modelo
IDS cantonal	-0.528*** (0.125)
Índice de competitividad cantonal	11,497 (29,500)
Tasa de homicidios	0.292** (0.130)
Constante	41,817*** (9,933)
Observaciones	81
R ²	0.426
R ² ajustado	0.404
F	19,06

Nota: Error estándar entre paréntesis.

***p < 0.001, **p < 0.01, p < 0.05.

Fuente: Elaboración propia con datos del Tribunal Supremo de Elecciones (2026), MIDEPLAN 2023 y OIJ (2025).***Interpretación sustantiva: territorialización de la crisis hegemónica***

Más allá de la significancia estadística, los resultados adquieren relevancia al situarse en el marco conceptual previamente planteado. La asociación sistemática entre menores niveles de desarrollo social, menor competitividad económica y mayores tasas de homicidio, así como mayores ventajas electorales del PPSO, sugiere que la reconfiguración política se sitúa en territorios donde convergen condiciones de fragilidad estructural.

Estos hallazgos son consistentes con la hipótesis de que la crisis del bloque histórico desarrollista no se manifiesta de manera homogénea, sino que es territorialmente diferenciada. En los cantones donde la integración socioeco-

nómica al proyecto nacional ha sido más débil, el consenso político asociado al eje histórico representado por el PLN presenta niveles más altos de erosión.

Desde esta perspectiva, la ventaja electoral del PPSO no puede interpretarse exclusivamente como un fenómeno discursivo ni como una reacción momentánea ante eventos específicos. En concreto, parece asociarse con configuraciones territoriales en las que se acumulan desigualdades sociales, inserciones productivas más débiles y contextos institucionales más frágiles.

Alcances y límites interpretativos

Si bien los modelos muestran asociaciones consistentes con la hipótesis teórica, conviene subrayar que el diseño transversal no permite establecer causalidad estricta. Los resultados deben interpretarse como evidencia de una correlación estructural compatible con la tesis de la territorialización de la crisis hegemónica, no como prueba definitiva de causalidad unidireccional.

No obstante, la coherencia entre el marco conceptual, las hipótesis formuladas y la evidencia empírica fortalece la plausibilidad de la interpretación propuesta: la diferencia electoral entre PPSO y PLN en 2026 se asocia sistemáticamente con configuraciones territoriales de fragilidad acumulada.

La fragilidad territorial y los clivajes territoriales

Los resultados obtenidos en este estudio dialogan directamente con el análisis desarrollado por Romero Zúñiga y Morales Gamboa (2026), quienes identificaron un clivaje territorial entre el desarrollo humano y el comportamiento electoral en Costa Rica. Su hallazgo principal —la asociación entre menores niveles de desarrollo y mayor apoyo a opciones políticas emergentes— encuentra respaldo en la evidencia aquí expuesta: el Índice de Desarrollo Social (IDS) muestra una relación negativa y estadísticamente significativa con la diferencia porcentual de votos entre el PPSO y el PLN.

No obstante, el presente análisis amplía ese planteamiento en al menos tres dimensiones. En primer lugar, mientras Romero Zúñiga y Morales Gamboa centran su explicación en el desarrollo humano como variable principal, este estudio incorpora la competitividad cantonal como indicador de la inserción

territorial en el régimen de acumulación dominante. La inclusión del Índice de Competitividad Cantonal (ICC) permite observar que la reconfiguración electoral no solo se vincula con las condiciones de bienestar social, sino también con las capacidades productivas y la posición económica relativa en el espacio nacional.

Los resultados sugieren que el clivaje observado posee una naturaleza fundamentalmente socioterritorial antes que estrictamente económica. La pérdida de significancia del índice de competitividad cantonal indica que las diferencias en la inserción productiva territorial no inciden directamente en el comportamiento electoral. En cambio, estas parecen operar a través de las condiciones sociales sedimentadas en los territorios, como resultado de procesos históricos de acumulación y de diferenciación socioespacial. En este sentido, el clivaje territorial identificado puede interpretarse como una expresión política de trayectorias de desarrollo desiguales que han configurado distintos regímenes territoriales de bienestar y de vulnerabilidad.

En segundo lugar, el presente trabajo introduce la tasa de homicidios como una dimensión institucional y de gobernanza territorial. Esta variable agrega una dimensión cualitativamente distinta al análisis, pues remite no solo a la desigualdad socioeconómica, sino también a contextos en los que la estatalidad efectiva puede verse erosionada (O'Donnell, 1993; Risse, 2011). La significancia estadística de esta variable en el modelo múltiple sugiere que la violencia no es un fenómeno periférico, sino una dimensión estructuralmente asociada a la reconfiguración del voto.

En tercer lugar, la estimación conjunta de estas variables permite observar que la diferencia electoral responde a una configuración multidimensional de fragilidad territorial, más que a un único eje explicativo. En este sentido, los resultados no contradicen el enfoque de Morales y Romero, sino que lo profundizan y complejizan, situándolo en un marco más amplio de crisis hegemónica y de reestructuración territorial del poder.

Fragilidad territorial y recomposición hegemónica

La evidencia empírica presentada adquiere mayor densidad interpretativa al situarse en el marco teórico de la hegemonía y el bloque histórico. Cuando las

bases socioeconómicas que sostienen el consenso y la legitimidad cultural se debilitan de manera territorialmente diferenciada, el sistema político tiende a fragmentarse espacialmente.

La ventaja electoral del PPSO frente al PLN, según el modelo múltiple, aumenta sistemáticamente en cantones con menores niveles de desarrollo social, menor competitividad económica y mayores tasas de homicidio. Estas tres dimensiones pueden interpretarse como expresiones empíricas de fragilidad territorial: integración socioeconómica debilitada, inserción subordinada en el régimen de acumulación y exposición a contextos de violencia que erosionan la densidad institucional.

En términos de economía política territorial, este patrón es coherente con la literatura citada sobre desarrollo geográfico desigual (Harvey, 2003) y reescalamiento estatal (Brenner, 2004), que subraya cómo la acumulación capitalista produce territorios ganadores y perdedores. También sustenta lo señalado por Rodríguez-Pose (2018): los territorios que perciben una exclusión relativa tienden a expresar su descontento políticamente. En el caso costarricense, la ventaja del PPSO en los cantones más frágiles sugiere que la erosión del consenso político tradicional se manifiesta con mayor intensidad en espacios donde la integración al proyecto desarrollista histórico fue más débil o más precaria.

Desde la perspectiva del bloque histórico, estos resultados pueden interpretarse como indicios de una recomposición hegemónica. El partido que históricamente articuló el eje desarrollista —el PLN— pierde mayor respaldo precisamente en los territorios donde las bases materiales de su legitimidad han mostrado un mayor desgaste. La emergencia de nuevas lealtades políticas en esos espacios no constituye necesariamente la consolidación de una nueva hegemonía, pero sí indica un desplazamiento territorial de los apoyos políticos y, en cierta medida, del consenso.

La fragilidad territorial, en este sentido, no es simplemente una condición socioeconómica adversa; es el espacio en el que se reconfiguran las relaciones de poder. Los cantones con mayores niveles de fragilidad se convierten en escenarios privilegiados de conflictividad social y disputas políticas, donde el debilitamiento de las formas tradicionales de mediación abre paso a nuevas

articulaciones entre élites emergentes, liderazgos locales y sectores sociales desintegrados del pacto histórico.

En consecuencia, la geografía electoral de 2026 no debe interpretarse únicamente como expresión de la volatilidad partidaria, sino como evidencia de una transición hegemónica en curso, territorialmente diferenciada. La reconfiguración del poder político no se produce de manera abstracta ni homogénea, sino que está anclada en territorios concretos donde la fragilidad acumulada erosiona el consenso previo y habilita nuevas formas de alineamiento político.

Discusión general y conclusiones

Los resultados de este estudio, aunque centrados en el análisis de una coyuntura electoral, permiten avanzar hacia una interpretación más amplia de las transformaciones recientes del orden sociopolítico costarricense. Más que evidenciar únicamente asociaciones territoriales entre la desigualdad y el comportamiento electoral, la evidencia sugiere que la reconfiguración política observada en las elecciones de 2026 forma parte de un proceso más profundo de rearticulación territorial de la hegemonía.

En este sentido, la geografía electoral emergente no refleja únicamente fluctuaciones coyunturales del sistema de partidos, sino también transformaciones en las bases materiales y espaciales del consenso político que estructuró el orden desarrollista costarricense durante gran parte del siglo XX.

El principal aporte del análisis consiste en mostrar que la erosión del bloque histórico costarricense se manifiesta de manera territorialmente diferenciada. Los patrones identificados sugieren que el debilitamiento del consenso político asociado al eje histórico del sistema de partidos no se distribuye de forma homogénea en el territorio, sino que se concentra con mayor intensidad en aquellos espacios donde convergen condiciones de fragilidad estructural. Cantones caracterizados por menores niveles de desarrollo social, menor inserción productiva y mayor exposición a violencia letal muestran mayores desplazamientos respecto del eje político tradicional. La fragilidad territorial aparece así no solo como un indicador de desigualdad socioeconómica, sino también como una configuración espacial en la que se articulan condiciones

materiales, institucionales y políticas que redefinen los escenarios de competencia electoral.

Este hallazgo permite ampliar las interpretaciones recientes sobre los clivajes territoriales en Costa Rica. La evidencia presentada sugiere que la dinámica territorial del voto se inscribe en una configuración más compleja de desigualdades acumuladas. La convergencia entre rezago social, debilidad institucional e inserción productiva subordinada apunta a una estructura multidimensional de fragilidad territorial que modifica las formas de mediación política en determinados espacios del país.

En términos de economía política comparada, este patrón se ajusta a la literatura sobre el desarrollo geográfico desigual y las nuevas geografías del descontento. La reestructuración contemporánea del capitalismo ha producido territorios altamente integrados a los circuitos globales de acumulación, junto a otros que progresivamente se han desconectado de esas dinámicas. En los territorios donde los beneficios del crecimiento económico se perciben como limitados o ausentes, las mediaciones políticas tradicionales tienden a perder capacidad de articulación. Desde esta perspectiva, el caso costarricense se aproxima a procesos observados en diversas democracias donde las fracturas territoriales del desarrollo han generado realineamientos electorales que tienden a desafiar el orden político existente.

Los resultados también invitan a reconsiderar algunas interpretaciones del excepcionalismo político costarricense. Durante décadas, la estabilidad institucional del país se explicó, en parte, por la capacidad del Estado social para integrar territorialmente a amplios sectores de la población. Sin embargo, la persistencia de desigualdades subnacionales y la fragmentación progresiva de las capacidades estatales sugieren que ese patrón integrador se encuentra hoy sometido a tensiones estructurales. La crisis contemporánea no implica necesariamente el colapso del orden político previo, pero sí evidencia una transformación de las condiciones territoriales que permitían su reproducción.

Desde una perspectiva gramsciana, el proceso observado puede interpretarse como una crisis orgánica en desarrollo. Las formas tradicionales de dirección política pierden capacidad integradora mientras emergen nuevas configuraciones de poder aún incapaces de consolidar una hegemonía alternativa plena-

mente estabilizada. En este contexto, los territorios caracterizados por niveles más altos de fragilidad estructural se convierten en espacios privilegiados de disputa política, donde el debilitamiento de las mediaciones institucionales abre la posibilidad de nuevas articulaciones entre actores políticos, liderazgos locales y sectores sociales desarticulados del pacto desarrollista histórico.

Este estudio sugiere, por tanto, que la dimensión territorial constituye un componente clave para comprender las transformaciones contemporáneas del sistema político costarricense. La reconfiguración electoral no responde únicamente a cambios ideológicos ni a dinámicas coyunturales de campaña, sino que se encuentra anclada en configuraciones territoriales más profundas que articulan la desigualdad socioeconómica, la estatalidad diferenciada y las experiencias locales de exclusión relativa.

Naturalmente, esta interpretación presenta limitaciones que deben considerarse. El diseño transversal utilizado no permite establecer relaciones causales estrictas ni captar la evolución temporal de estos procesos. Asimismo, el análisis se basa en indicadores estructurales agregados que no permiten observar directamente las motivaciones individuales del electorado. Futuros estudios podrían avanzar en esta agenda mediante diseños multinivel que integren datos de opinión pública, análisis espaciales más sofisticados y comparaciones longitudinales entre distintos ciclos electorales.

A pesar de estas limitaciones, la consistencia entre el marco conceptual, la hipótesis y la evidencia empírica sugiere que la categoría de fragilidad territorial constituye una herramienta analítica particularmente útil para interpretar las transformaciones políticas contemporáneas en Costa Rica. Más que un simple indicador de rezago socioeconómico, la fragilidad territorial revela configuraciones espaciales en las que convergen la desigualdad estructural, el debilitamiento institucional y la reconfiguración de las lealtades políticas.

En este sentido, la principal contribución del artículo consiste en proponer una lectura territorial de la crisis hegemónica costarricense. La transición política en curso no puede entenderse únicamente como alternancia partidaria ni como una fluctuación electoral episódica; es, ante todo, una transformación territorial de las bases del poder político.

La geografía electoral no constituye un epifenómeno del proceso político, sino uno de los espacios privilegiados en los que se manifiestan las transformaciones contemporáneas del orden sociopolítico costarricense. Se trata de un proceso de reordenamiento territorial del poder político, en el que las fracturas del desarrollo y las desigualdades acumuladas configuran nuevos escenarios de disputa hegemónica.

Comprender esta dimensión espacial resulta, por tanto, fundamental para interpretar no solo los resultados electorales de 2026, sino también las transformaciones más amplias que atraviesan actualmente el sistema sociopolítico costarricense.

Finalmente, la principal contribución teórica consiste en proponer la fragilidad territorial como categoría analítica para interpretar la territorialización de las crisis hegemónicas. A partir del caso costarricense, el estudio muestra que la geografía electoral puede leerse como una expresión empírica de la reconfiguración territorial del bloque histórico, donde convergen la desigualdad socioeconómica, la estatalidad diferenciada y la inserción productiva desigual.

REFERENCIAS

- Arias, Enrique. 2017. *Criminal enterprises and governance in Latin America and the Caribbean*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Brenner, Neil. 2004. *New state spaces: Urban governance and the rescaling of statehood*. New York: Oxford University Press.
- Gramsci, Antonio. 1981. *Cuadernos de la Cárcel*. Ediciones Era y Benemérita Universidad de Puebla.
- Harvey, David. 2003 *The new imperialism*. New York: Oxford University Press.
- Inglehart, Ronald, y Pippa Norris. 2016. *Trump, Brexit, and the rise of populism: Economic have-nots and cultural backlash*. Faculty Research Working Paper Series, RWP16-026. Cambridge, MA: Harvard Kennedy School.
- King, Gary. 1997. *A solution to the ecological inference problem: Reconstructing individual behavior from aggregate data*. Princeton: Princeton University Press.
- Koonings, Kees. 2004. “Armed actors, violence and democracy in Latin America in the 1990s”. *Bulletin of Latin American Research* 20, núm. 4, <https://doi.org/10.1111/1470-9856.00022>
- Lessing, Benjamin. 2021. *Making peace in drug wars: Crackdowns and cartels in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Migdal, Joel. 2001. *State in society: Studying how states and societies transform and constitute one another*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muggah, Robert. 2014. Deconstructing the fragile city: Exploring insecurity, violence and resilience. *Environment and Urbanization* 26, núm. 2, <https://doi.org/10.1177/0956247814533627>
- Muggah, Robert. 2019. “The rise of citizen security in Latin America and the Caribbean.” *International Development Policy* 9. <https://doi.org/10.4000/poldev.2377>

- Norris, Pippa. 2011. *Democratic deficit: Critical citizens revisited*. New York: Cambridge University Press.
- O'Donnell, Guillermo. 1993. "On the state, democratization and some conceptual problems: A Latin American view with glances at some post-communist countries." *World Development* 21, núm 8, [https://doi.org/10.1016/0305-750X\(93\)90048-E](https://doi.org/10.1016/0305-750X(93)90048-E)
- Pérez, Juan Pablo. (2014). *Mercados y bárbaros: La persistencia de las desigualdades de excedente en América Latina*. San José, C.R: FLACSO.
- Pérez, Juan Pablo, ed. 2017. *Sociedades fracturadas: La exclusión social en Centroamérica*. San José, C.R: FLACSO.
- Poulantzas, Nicos. 1978. *State, power, socialism*. Verso.
- Risse, Thomas, ed. 2011. *Governance without a state? Policies and politics in areas of limited statehood*. New York: Columbia University Press.
- Rodríguez-Pose, Andrés. 2018. The revenge of the places that don't matter (and what to do about it). *Cambridge Journal of Regions, Economy and Society* 11, núm 1, <https://doi.org/10.1093/cjres/rsx024>
- Sandoval, Carlos, Karla Barrantes, Bryan Rodríguez y Carolina Sánchez. 2025. *Nuevas cartografías para comprender la Costa Rica del siglo XXI*. San José, C.R: Fondo de Población de las Naciones Unidas.
- Sassen, Saskia. 2001. *The global city: New York, London, Tokyo*. Princeton: Princeton University Press.
- Trejo, Guillermo y Sandra Ley. 2020. *Votes, drugs, and violence: The political logic of criminal wars in Mexico*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Yashar, Deborah. 2018. *Homicidal ecologies: Illicit economies and complicit states in Latin America*. Cambridge: Cambridge University Press.

REFLEXIONES FINALES TERRITORIO, DESIGUALDAD Y RECOMPOSICIÓN POLÍTICA

Abelardo Morales Gamboa y Juan José Romero Zúñiga

Los resultados de las investigaciones que dan contenido a este dossier permiten sustentar una premisa analítica: las transformaciones del sistema sociopolítico costarricense pueden comprenderse adecuadamente si las relacionamos con la dimensión territorial, entendida como constitutiva de dichos cambios y no como mero contexto del comportamiento electoral. Más allá de las particularidades en el énfasis conceptual y en la estrategia metodológica, los trabajos publicados coinciden en mostrar que la competencia política observada en las elecciones de 2026, a partir del diferencial de votos entre los partidos mayoritarios, expresa procesos más profundos de estratificación socio-territorial, vinculados a trayectorias diferenciadas de desarrollo, a la acumulación de fragilidades y a la recomposición de las bases espaciales de la representación política.

Un primer hallazgo en común es que los patrones electorales analizados se refieren a configuraciones territoriales estructuradas y no a distribuciones contingentes o aleatorias del voto. Tanto el análisis del gradiente de desarrollo humano como la aproximación desde la fragilidad territorial muestran que las desigualdades locales no solo condicionan el entorno en el que se desarrolla la contienda política, sino que también participan activamente en su estructuración. Como lo dicta la teoría en la que se sustentan los estudios, el territorio emerge como una dimensión relacional en la que se articulan oportunidades, capacidades institucionales y alineamientos políticos.

Un segundo aporte del dossier consiste en cuestionar lecturas dicotómicas o simplificadas de la geografía política. Los resultados de ambos trabajos coinciden en que las dinámicas observadas no responden a oposiciones bina-

rias —centro/periferia, territorios integrados/excluidos, urbano/rural— sino a gradientes y configuraciones más complejas de diferenciación territorial. Este desplazamiento analítico resulta relevante porque permite situar el caso costarricense en diálogo con debates comparados sobre la territorialización del conflicto político, pero evitando la transferencia mecánica de marcos provenientes de otras experiencias nacionales.

Desde esta perspectiva, entre los principales aportes del dossier se muestra que las desigualdades territoriales en el desarrollo pueden pensarse no solo como expresión de heterogeneidades socioeconómicas, sino también como dimensiones que intervienen en la reorganización contemporánea de los clivajes políticos. En un artículo, ello se muestra como evidencia empírica de un clivaje socioterritorial estructurado por el desarrollo humano; en el otro, como manifestación territorializada de procesos más amplios de fragilidad y recomposición hegemónica. Lejos de operar como explicaciones alternativas, ambos enfoques resultan analíticamente complementarios y permiten una comprensión más densa de las transformaciones observadas.

Esa complementariedad puede verse, en sí misma, como una contribución del dossier. El diálogo entre una estrategia cuantitativa robusta orientada a identificar regularidades empíricas y una lectura desde la economía política interesada en interpretar sus implicaciones histórico-estructurales permite conectar niveles de análisis que, con frecuencia, aparecen escindidos en la literatura especializada. En ese sentido, se propone una interpretación de los realineamientos políticos contemporáneos a partir de aproximaciones capaces de articular el análisis territorial, la sociología política y la economía política comparada.

Un hallazgo que puede resultar particularmente relevante es que estas transformaciones no parecen remitir únicamente a procesos de volatilidad partidaria o crisis de representación, sino a desplazamientos más profundos en las bases territoriales del poder político. Esta hipótesis conecta el caso costarricense con discusiones más amplias sobre la reconfiguración espacial de la hegemonía, la geografía del descontento y los efectos políticos del desarrollo desigual. El aporte del dossier consiste en sugerir que tales debates resultan igualmente fecundos para interpretar las dinámicas latinoamericanas, más allá de los contextos en los que originalmente fueron formulados.

Desde esta perspectiva, también se propone una lectura del territorio no como soporte en el que ocurren procesos políticos previamente dados, sino como dimensión constitutiva de dichos procesos. Este desplazamiento tiene implicaciones no solo para el análisis electoral, sino también para la comprensión de la democracia, la representación y las desigualdades subnacionales en la región.

Asimismo, los trabajos aquí reunidos sugieren la productividad de los cruces entre diversas disciplinas que articulen la geografía crítica, el análisis político, la economía política y, en este caso, los aportes provenientes de la epidemiología crítica. Este no es un resultado menor. Más que un recurso metodológico auxiliar, esa convergencia se presenta como condición para captar fenómenos cuya complejidad excede los marcos disciplinarios convencionales.

Más que dar por acabada una interpretación, este dossier busca abrir nuevos diálogos a través de la investigación. Su apuesta es que comprender las transformaciones contemporáneas de la democracia costarricense exige mirar no solo a los partidos, los liderazgos o las coyunturas electorales, sino también otras dimensiones, entre ellas los territorios donde se sedimentan —y eventualmente se reconfiguran— las relaciones entre desigualdad, poder y representación política, así como la estructural e institucional que organizan la territorialidad.

La principal contribución del dossier quizá no sea únicamente explicar un proceso electoral en particular, sino también contribuir a la territorialización del análisis de la democracia costarricense. Esto implica tres contribuciones a la comprensión teórica de la problemática analizada:

Una contribución consiste en proponer —como se ha señalado— que el territorio no opera simplemente como un contexto donde se expresan clivajes preexistentes, sino como una dimensión constitutiva en la producción contemporánea de los clivajes políticos y de las recomposiciones hegemónicas.

En segundo lugar, el dossier propone una articulación original entre la teoría de clivajes, los enfoques de fragilidad territorial y la problemática de la recomposición hegemónica, sugiriendo que las desigualdades territoriales no solo estructuran las preferencias electorales, sino también las bases espaciales del consenso y su erosión.

En cuanto al estudio de las configuraciones territoriales de la crisis de la hegemonía, el dossier intenta superar las perspectivas tradicionales de la geografía electoral, entendida únicamente como la distribución espacial de preferencias políticas, para discutir en torno a dimensiones relacionadas con la manifestación territorializada de procesos de recomposición política y de crisis hegemónica.

En diálogo con debates como los de Rodríguez-Pose, Piketty y Kriesi, el caso costarricense aporta en mostrar que las desigualdades territoriales no solo pueden asociarse —como en la “geografía del descontento”— a la territorialización del malestar y la exclusión, ni únicamente a nuevos alineamientos entre ganadores y perdedores de la globalización, sino también a procesos de recomposición territorial del conflicto político en contextos latinoamericanos marcados por crisis de hegemonía y fragilidades institucionales. En ese sentido, el caso costarricense no solo extiende esos debates a un contexto poco explorado, sino que también contribuye a matizarlos al subrayar que el desarrollo desigual puede operar no solo como fuente de malestar, sino también como principio organizador de nuevos clivajes políticos.

Un aporte adicional del dossier radica en su dimensión metodológica. Más allá de los resultados sustantivos, ambos trabajos muestran la productividad de estrategias analíticas que articulan la modelación cuantitativa, el análisis territorial y la representación cartográfica para estudiar procesos políticos. El uso combinado de análisis estadístico, gradientes territoriales, mapas y visualización espacial no cumple aquí una función meramente ilustrativa, sino heurística: permite observar regularidades, relaciones espaciales y patrones de estructuración política que difícilmente se captarían mediante aproximaciones agregadas convencionales o lecturas exclusivamente narrativas del comportamiento electoral.

En ese sentido, el uso de herramientas de geografía electoral y de representación cartográfica forma parte del aporte del dossier. Los mapas no operan como simples apoyos descriptivos, sino como instrumentos analíticos que hacen visible la dimensión espacial de los clivajes identificados y refuerzan la coherencia entre la hipótesis conceptual —el territorio como estructura social y política— y la evidencia empírica presentada. Esa articulación entre el enfoque conceptual y la observación empírica constituye una fortaleza del conjunto.

Asimismo, la convergencia entre los hallazgos empíricos y los marcos conceptuales movilizados no debe entenderse como una mera confirmación de lo que ya sugería la literatura comparada. En un sentido estricto, el dossier no solo “prueba” hipótesis conocidas en un caso adicional, sino que también contribuye a extender y matizar esos debates en tres sentidos. Primero, muestra que marcos desarrollados principalmente para democracias europeas o norteamericanas —sobre la territorialización del descontento, el desarrollo desigual o la reconfiguración de clivajes— tienen capacidad explicativa en un caso latinoamericano históricamente poco abordado desde esas claves. Segundo, propone una articulación original entre el análisis de clivajes socioterritoriales y la categoría de fragilidad territorial, lo que amplía la comprensión del vínculo entre la desigualdad territorial y la recomposición política. Y tercero, aporta evidencia empírica sistemática para pensar la dimensión territorial como principio organizador del conflicto político en Costa Rica, un aspecto que, aunque intuido en análisis previos, había sido escasamente demostrado con este grado de integración conceptual y metodológica.

Igualmente, la contribución del dossier no radica únicamente en corroborar asociaciones esperables entre la desigualdad territorial y el comportamiento electoral, sino en proponer una forma más integrada de conceptualizar, medir e interpretar dichas relaciones. Más que verificar un conocimiento ya dado, el dossier contribuye a desplazar el problema, reformular preguntas y abrir un campo de investigación sobre la dimensión territorial de la recomposición política en Costa Rica y, potencialmente, en otros contextos latinoamericanos.

Un último resultado de este trabajo nos permite reconocer que el diálogo entre las ciencias sociales y el enfoque ecosocial de la epidemiología abre nuevas perspectivas de análisis, como en este caso, en el análisis de la relación de la dimensión territorial y la crisis política. Compartimos marcos conceptuales en el análisis geográfico, la historicidad de los procesos sociales, y el lugar de las estructuras e instituciones sociales, así como de la cultura, en la determinación de condiciones de vida y salud de las poblaciones. En este sentido, el enfoque ecosocial nos permite compartir herramientas conceptuales y metodológicas para articular escalas de análisis diferentes—territoriales, sociales, biológicas, decisiones colectivas, por ejemplo— sin reducir la complejidad de los procesos epidemiológicos o sociales a una lectura positivista o meramente descriptiva.

Más ampliamente, este dossier sugiere una agenda futura que no se limita al uso de conceptos y herramientas de investigación, sino que plantea la conveniencia de profundizar en los cruces entre estrategias metodológicas, categorías conceptuales y enfoques disciplinarios para el estudio de las desigualdades territoriales y la recomposición política. En esa dirección, una línea promisorio no radica únicamente en sofisticar técnicas de análisis, sino en seguir explorando diálogos aún poco desarrollados en el medio costarricense entre geografía crítica, economía política, epidemiología crítica y sociología política, como parte de una reflexión más amplia sobre los marcos epistemológicos desde los cuales se construyen estos objetos de estudio.

En ese marco, una agenda futura de investigación podría profundizar en tres direcciones. Primero, avanzar hacia estudios longitudinales que permitan evaluar la estabilidad o la reconfiguración de estos clivajes territoriales en distintos ciclos electorales. Segundo, explorar con mayor detalle las mediaciones institucionales, culturales y organizativas que articulan las desigualdades territoriales y los alineamientos políticos. Tercero, explorar nuevas estrategias de investigación para dar cuenta de las dimensiones subjetivas de la crisis de hegemonía y de sus reconfiguraciones territoriales, que requieren aproximaciones cualitativas. Y cuarto, extender comparativamente estas preguntas a otros casos latinoamericanos en los que las desigualdades subnacionales parecen desempeñar un papel creciente en la reorganización del conflicto político.

Reseña de los autores

Juan José Romero-Zúñiga. Costarricense. Médico veterinario. Máster en Reproducción Animal Sostenible. Doctor en Epidemiología por la Universidad de Wageningen, Holanda. Catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) donde se desempeña como profesor en la Escuela de Medicina Veterinaria. Posee múltiples publicaciones en revistas científicas especializadas y capítulos de libros. Columnista del diario La Nación de Costa Rica.

Abelardo Morales-Gamboa. Costarricense. Sociólogo y comunicador social. Máster en Relaciones Internacionales. Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Utrecht, Holanda. Ha sido Catedrático de la Universidad Nacional de Costa Rica donde fue profesor de la Escuela de Sociología. Actualmente, es profesor asociado de FLACSO Costa Rica. Ha publicado diversidad de trabajos en libros, capítulos de libros y en revistas científicas especializadas.

Cuaderno de **Ciencias Sociales**

Los Cuadernos de Ciencias Sociales de FLACSO Costa Rica constituyen un espacio para la difusión de investigaciones, análisis y reflexiones que contribuyen a comprender las transformaciones y los desafíos de las sociedades contemporáneas. En un formato ágil y focalizado, la colección busca poner en circulación conocimiento riguroso y relevante, estimular el debate y acercar los aportes de las ciencias sociales a públicos diversos.

La colección reúne investigaciones empíricas, ensayos académicos, aportes teóricos y metodológicos y análisis sustentados en investigación, provenientes de distintas disciplinas y perspectivas de las ciencias sociales. Con especial atención a Costa Rica, Centroamérica, América Latina y el Caribe, los Cuadernos de Ciencias Sociales promueven trabajos que, por su solidez académica, claridad argumentativa y pertinencia social, aporten nuevas preguntas, interpretaciones y herramientas para pensar críticamente las realidades de nuestra región.



FLACSO
COSTA RICA